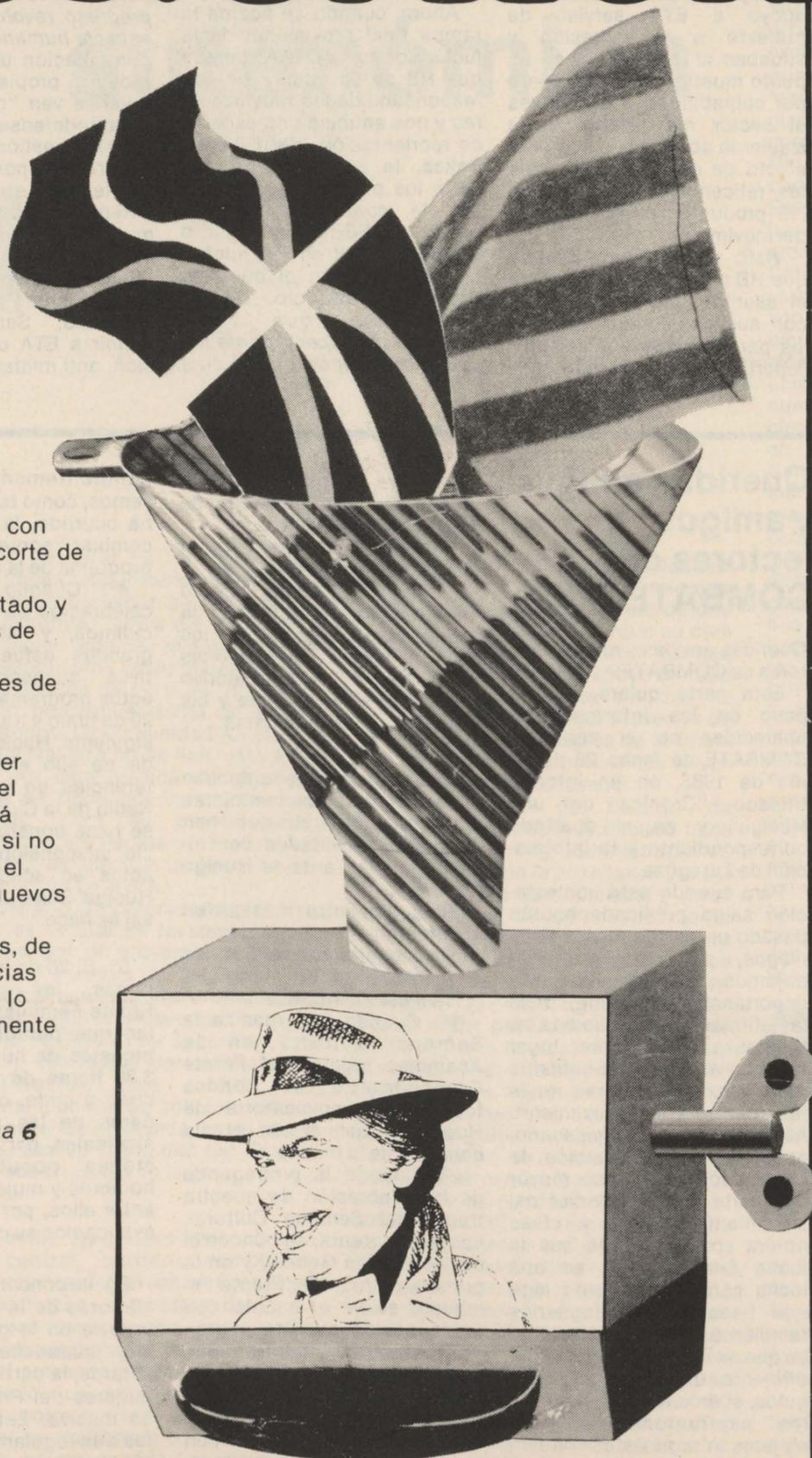


LA CRISIS AUTONÓMICA



El gobierno ha iniciado el curso político con dos graves atentados centralistas: el recorte de la participación de las Comunidades Autónomas en los Presupuestos del Estado y el proyecto de ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Varios miembros del PSOE, presidentes de Comunidades Autónomas se han visto obligados a votar contra (de entrada) al proyecto de asfixia económica y el primer apoyo a la nueva ley de policía ha sido el Fraga. CDC ha anunciado que convocará manifestaciones y Arzallus se pregunta si no está llegando el momento de denunciar el Estatuto. Obiols y Solé Tura proponen nuevos retoques al Estado de las Autonomías.

Pero más allá de oposiciones dudosas, de abundante demagogia, de inconsecuencias previsibles y de ofertas de solución que lo dejan todo igual, lo importante políticamente es que, de nuevo, ha estallado la crisis autonómica.

Editorial en página 3 y artículo en página 6

Chile: historia de una derrota

El pasado 11 de septiembre se cumplió el 12 aniversario del golpe de estado que suplantó al gobierno de la Unidad Popular presidido por Salvador Allende, que perdió la vida en aquellos sucesos. Tras los primeros años de dictadura, muy difíciles para la resistencia muy debilitada por la represión y el exilio, comenzó la reorganización del movimiento de masas. Los últimos años arrojan un balance de evidente reorganización del movimiento obrero y popular y de progresivo aislamiento de la dictadura pinochetista.

Páginas, 9 y 11

La OTAN, los chips y el Pato Donald

El gobierno socialista quiere integrar el Estado español en el imperialismo por todos los medios y en todas las estructuras. No es sólo que le mantenga en la OTAN o haya conseguido la entrada en la CEE, sino que se trata además, de lograr la occidentalización más completa de las posibles.

UNA LUCHA EJEMPLAR EN LA SANIDAD DE SEVILLA

Noalim denen aurka

Udarako hilabeteetan zehar Noalim burruka zeharo deformaturik aurkeztu digute prentsa informazioetan, burruka marginal izango baltzateke bezela. Baina aldearantziz, erresistetziako esperientzia jatorra izan da.

Noalim-go langileak Sevilla-ko "indar bizi" guztia aurpegia eman behar izan die: Andaluziako Junta, sanitario-ko administrazioari, prentsari, polizari, ugazabei, kasu konkretu honetan Noalim-go Gerardo Martínez Retamero kazikea buru zelarik, Betisko presidentia dugu jauntxo hau.

Noalim-go lagunek betikoak izan dira: ezker sindikala eta batez ere geure alderdia.



Argitaratzen du:
LIGA KOMUNISTA IRAULTZAILEA
Langarren Internazionala

Erredakzioa:
Aska 23, 3º. Bilbo.
Peña y Goñi, 13. Donostia.

Depósito Legal: M-30514-1977

Erredakzioa:
Plaza Nueva 6 4º. Bilbo
Peña y Goñi, 13. Donostia
Depósito Legal: M-30514-1977

Zuzendaria
Jesús Landa

Erredakzio Batzardea
M. Taylor, Luis Hita, Carmen Vela,
Tomás Cerro, Eduardo Haro Ibars,
Ángel Valcárcel, Ignacio Rubio.

Korresponsalak:
Catalunya: Pep Roca, J. Borrás,
Joaquín Nieto.
Euskadi: J.I. Iriarte, Marta Brancas,
Etorre, Joseba Barriola.
País Valenciá: Carmen Martínez.
Aragón: Ramón Gorrioz.
Asturias: Juanjo.
Madrid: J. Mª Galante.

diagramazioa:
Pilar Arias Camacho

Argazkiak:
Iskra Press.

GUREKIN HARREMANAK IZATEKO

Bilbo, Plaza Nueva 6-4º. 415.52.11
48005.
Donostia, Peña y Goñi 13-1º. 289689
20002.
Iruñea, Zapateria, 31-1º. 227517. 31001
Gasteiz, Hospital, 4 centro B. 276992
01004.

... eta LCR

Barcelona, Aribau 16, pral.2º.
302.60.90. 08018.
Madrid, Embajadores 24-1º. 227.96.51.
28012.
Las Palmas de Gran Canaria, Primero
de Mayo 24-2º. 366579. 35002.
Tenerife, Herradores 47-3º edificio de
cine Aguerre (La Laguna).
Valencia, Embajador Vich 5-3º.
321.21.52. 46002.
Zaragoza, Bilbao 7 pral.dcha. 216531.
50004.
Sevilla, Narciso Campillo 5-1º. 41001.
Salamanca, Pza. España 6-1º. 37003.

correspondencia a "Zutik!"
Aptdo. Correos nº 871. 48080 Bilbo.

BOLETIN DE SUSCRIPCION

— Anual. 2.000 pts.
— Semestral. 1.000 pts.
EUROPA
— Anual. 18,9 dólares
— Semestral. 9,4 dólares
OTROS PAISES
— Anual. 23,5 dólares
— Semestral. 11,7 dólares

Forma de pago:

Talón o transferencia bancaria a nombre de: LCR, cta. nº 01-504000-2, del Banco de Vizcaya, agencia urbana Gorieta Bilbao, Madrid.
 Contra reembolso.

Nombre
Dirección
Localidad/país

LA PAZ Y LA OTAN:

Algo se mueve en Euskadi

En los últimos años de auge del movimiento anti-OTAN se venía notando una cierta resistencia y pasividad por parte de HB a la hora de hacer campañas o acudir a las movilizaciones.

Parecía como que luchando por lo propio, podía apazarse el esfuerzo específico que nos vincula en una tarea común a todos los pueblos del Estado: salir de la OTAN.

Agustín Ormazabal
(Donostia)

Quienes nos movemos en el terreno anti-militarista estábamos desconcertados, cuando no contrariados, máxime si a ello añadíamos que en las contadas circunstancias en las que se conseguía movilizaciones comunes —por ejemplo en el otoño del 83— la presencia de HB y sus consignas particulares de apoyo a ETA servían de pretexto a la represión y situaban al movimiento en un punto muerto crítico, no tanto por culpabilidades atribuibles al sector mayoritario de la izquierda abertzale, sino por el efecto de desorientación que las reticencias anteriores de HB producían en el conjunto del movimiento.

Visto desde fuera parecía que HB no sentía como propio el asunto y se desmelenaba con sus consignas particulares para hacerse sentir como copartícipe de la movida anti-

imperialista. Si esto es exagerado, hay que decir que algo había, que se manifestaban ciertos sentimientos de exterioridad, y que semejante contradicción no se le escapaba al Gobierno: están los "batasunos", o se ilegaliza el asunto, o forzamos la división radicalizando las cosas...

Ahora, cuando se acerca la rampa final provisional de la lucha contra la OTAN, parece que HB se da cuenta de sus responsabilidades movilizadoras y nos anuncia una especie de reorientación. Herri Arteko Bakea, la comisión pro paz entre los pueblos, auspiciada por la coalición abertzale, envía a EGIN un escrito titulado "¿Vivir en Paz, luchar por la Paz?", en el que nos hace un anuncio de la "reflexión que nos proponemos hacer durante los próximos tiempos, para lo cual

se habrá de intensificar el campo de nuestras relaciones con los demás movimientos, tanto vascos como del resto del Estado, al compás también de ciertas acciones y actividades concretas de las que iremos dando cuenta a partir de ahora".

Espoleada por las críticas de tibieza frente a las campañas contra Reagan, Herri Arteko Bakea se propone "contribuir a la generación de un movimiento por la Paz entre los pueblos"(...) "en la firme convicción de que nuestro movimiento ha de surgir impregnado de la situación concreta de Euskadi".

La mejor novedad, en mi opinión, es la siguiente afirmación: "nuestro movimiento podrá estar caracterizado, sin duda, como anti-militarista, pues el militarismo es un fenómeno social-político evidentemente regresivo y nefasto desde una idea de progreso revolucionario de la especie humana", indicando a continuación una separación radical propia respecto a quienes ven "militarismo" en la autodefensa sandinista.

Esta cuestión ideológica es importante porque, efectivamente, el autodenominarse anti-militarista traía "locos" a muchos militantes de HB. En el debate que mantuvimos en Irún el "Fuero por el Desarme" de Donostia y HB de aquella localidad, Sastre llegó a definir a ETA como organización anti-militarista, cuestión

que pareciendo nimia o pasional tiene un trasfondo de importantes repercusiones teóricas. Al tiempo. Es decir, entre las filas de HB hay quien puede no ver en ETA una organización militar alternativa clásica. ETA es una organización de resistencia curiosamente atípica. Difícilmente homologable.

El militarismo es la exacerbación de lo militar, la degeneración hasta el absurdo, hasta el límite, de la lógica militar. En este sentido la OTAN concentra hoy todos los desvaríos, al más alto grado de la práctica militar y del militarismo. Concentra en su esencia misma todo el absurdo de una civilización y una cultura capitalista decadente, creadora de miserias, depredadora de la naturaleza y preparadora de la hecatombe nuclear.

Es de esperar que la plena incorporación de los entornos de HB a la práctica anti-militarista sirva, de un lado, para masificar decididamente los esfuerzos del movimiento y, de otro, —aquí está el quid— para poner a la orden del día las evidentes especificidades del frente vasco en el tema de la Paz. La cuestión del referéndum no debe de ser una cuestión delimitadora, ya que ante la posibilidad de su celebración —hay otras— parece perfilarse una disposición común entre todas las fuerzas anti-imperialistas vascas a votar no.

Queridas amigas y amigos lectores de COMBATE

Queridas amigas y amigos lectores de COMBATE:

Esta carta quiere salir al paso de las informaciones aparecidas en el periódico COMBATE de fecha 28 de junio de 1985, en un informe titulado "Crónica de una Huelga" y en el apartado correspondiente a la información de Zaragoza.

Para cuando esta contestación salga publicada habrán pasado un par de meses veraniegos, pero no por ello dejamos de ver la gran importancia que tiene, pues las afirmaciones a que nos referimos son en primer lugar falsas y en segundo nefastas para algo que muchas mujeres dentro del movimiento feminista creemos necesario: conseguir la comprensión, la asimilación cada vez mayor por parte de los sindicatos, movimiento obrero y clase obrera en general de que la lucha feminista no es una lucha parcial más, sino algo que tiene que impregnarles también a ellos, en el sentido de que no valdría una sociedad diferente, una victoria conseguida, si en ella no se recogen las aspiraciones de las mujeres. Y con éstas tendencias informaciones no se

contribuye precisamente a la unidad y comprensión de estos dos movimientos.

Refrescando la memoria, el mencionado artículo decía:

... "También y como aspecto negativo de la jornada, la escasa participación de los sectores como asociaciones de vecinos (AVS), el Colectivo por la Paz y el Desarme y las organizaciones feministas..."

... "Otro tanto puede decirse de organizaciones feministas como el "Frente" que han adoptado actividades de "independencia" ante la Huelga General..."

Sin querer entrar más que en lo referente a nuestra organización, queremos aclarar los siguientes puntos:

Haciendo historia:

1º. Cuando se organiza la Semana Cultural en la Asamblea regular del Frente Feminista no se conoce todavía la convocatoria de Huelga y menos aún el día concreto de la misma.

2º. Cuando la propaganda de la celebración de nuestra tradicional Semana Cultural, está en imprenta, se conoce el día de Huelga General y en la primera reunión del Frente Feminista se ve el asunto con preocupación, pues es un gran problema para nosotras que por unanimidad nos solidarizamos con dicha convocatoria.

3º. Se decide seguir con nuestros actos adelante. Inde-

pendientemente de ello, vemos, como tantas veces nos ha ocurrido, la posibilidad de cambiar "sobre la marcha" el programa de la Semana.

4º. Cuando comienza la celebración de la Semana decidimos, y ello nos cuesta grandes esfuerzos organizativos, suspender todos los actos programados para el día 20 de junio y trasladarlos al día siguiente. Haciendo propaganda de ello en nuestras conferencias, en toda la Prensa y Radio de la Ciudad, y en la que se hace constar textualmente "la suspensión de todos los actos en solidaridad con la Huelga General del día 20". Y así se hace.

5º. El 20 de junio somos, no pocas, las militantes del Frente Feminista de Zaragoza, las que participamos en los piquetes de huelga desde las 3,30 horas de la madrugada, codo a codo, con los compañeros de las organizaciones sindicales, partidos, organizaciones populares y con hombres y mujeres de la LCR, entre ellos, por lo que no nos explicamos su ceguera.

En la concentración de las 12 horas de la mañana y más todavía en la gran manifestación ciudadana celebrada por la tarde, la participación de las mujeres del Frente Feminista es masiva. Estábamos todas las que regularmente nutrimos las reuniones.

De los tres o cuatro únicos comercios que cerraron en nuestra Ciudad, uno de ellos es la Librería de Mujeres, gestionada por dos mujeres del Frente Feminista, con un gran cartel explicativo de su cierre en solidaridad con la Huelga General.

Concluyendo:

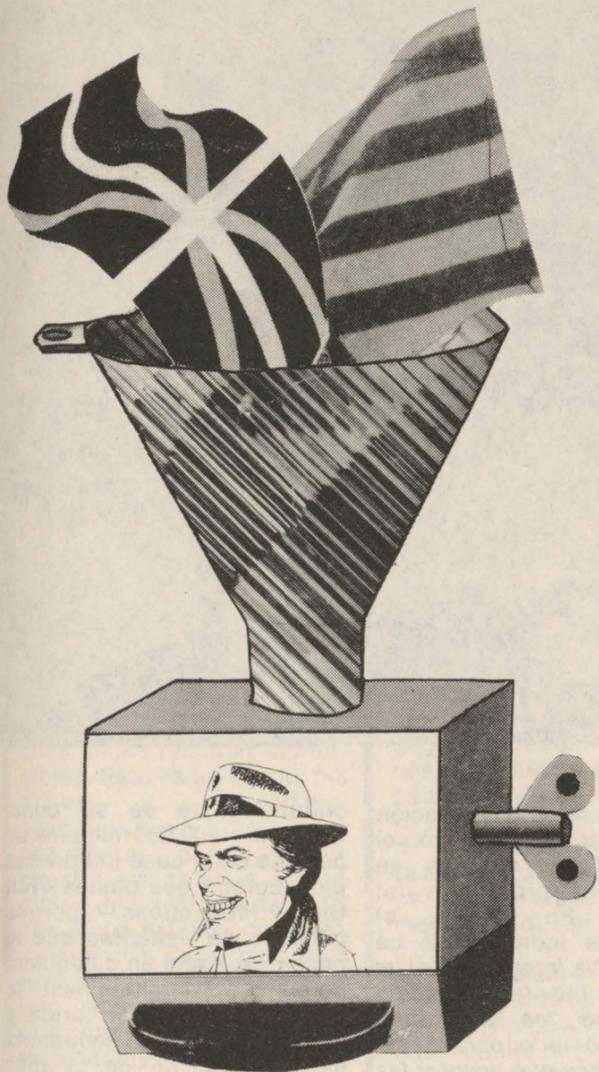
6º. Por todo lo que os hemos contado en los puntos anteriores, no nos explicamos a dónde va a parar una información como la aparecida en COMBATE, ni qué actitudes, parece que sectarias, la originan. Viendo, tal como lo ha expresado su redactor, al movimiento feminista de nuestra Ciudad y al Frente Feminista de Zaragoza, en concreto.

Más aún, cuando participamos en ella con compañeras que pertenecen a la LCR, igual que con mujeres de otros partidos e independientes y todas somos las protagonistas de las decisiones que de allí salen, pues para tomarlas basta con acudir a las reuniones, y en esta caso todas han sido aprobadas por unanimidad.

Sin más, amigas y amigos, esperando sirva para todos las rectificaciones que os enviamos, un abrazo de,

Rosa Fernández
Antonia Olaverri
Concha Rodríguez

Editorial



La crisis autonómica

NADA más iniciarse el curso político ha estallado una grave crisis autonómica a raíz de dos graves atentados centralistas del gobierno: el recorte de la participación de las Comunidades Autónomas en los Presupuestos del Estado y el proyecto de ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

El recorte de las asignaciones de los presupuestos a las Comunidades Autónomas supone, en primer lugar, el incumplimiento por parte del gobierno de la puesta en pie en 1986 de un sistema definitivo de financiación de las autonomías, tal como estaba establecido en la LOFCA y en el Estatuto de Catalunya. El cambio de sistema venía exigido también por la entrada en vigor del IVA, que reabsorberá parte de los impuestos que estaban cedidos a las autonomías. En segundo lugar, la medida del gobierno no es fruto de la negociación, sino una imposición pura y simple: Solchaga sólo obtuvo la mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, gracias a los votos del propio gobierno (el 50%); incluso los socialistas que representaban a Andalucía, Valencia y Canarias votaron en contra. En tercer lugar, la medida supone un recorte sustancial de los recursos (tradicionalmente precarios) de las autonomías y éstas deberán optar entre recortar de modo importante los servicios que venían prestando o mantenerlos por medio de un endeudamiento cercano a los 200.000 millones de pesetas. Si, como parece probable, se opta por esta solución, no se habrá disminuido el déficit público, sino que se habrá centrifugado hacia las autonomías (lo cual, a su vez, permitirá una campaña guberna-

mental, similar a la de 1984, haciéndolas responsables del mismo). Este estrecho margen de maniobra de las autonomías deriva del sistema de financiación vigente, que convierte a los Presupuestos en su principal fuente de ingresos (60%) y les fija ya un elevado porcentaje (65%) de gastos obligatorios. La Comunidad Autónoma Vasca y Navarra no se han visto afectadas por esta medida del gobierno porque se rigen por conciertos económicos, pero es prácticamente seguro que les llegará su turno en el momento de discutir la gestión y la participación en el IVA.

En cambio la Comunidad Autónoma Vasca es la que se ha sentido más afectada por el proyecto de ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Un proyecto al que Fraga ha prometido ya su apoyo y que prevé la creación de un Consejo de Política de Seguridad, presidido y controlado por el Ministerio del Interior, que invade las competencias de las policías autónomas y aleja las posibilidades de retirar las Fuerzas de Seguridad del Estado, ni que sea en un futuro lejano.

A estas agresiones del gobierno central, partidos nacionalistas que gobiernan en Catalunya y Euskadi han respondido de forma muy poco consecuente, pero fuertemente demagógica y buscando, ante todo, el provecho propio. Así, CDC ha anunciado que prepara una manifestación contra los recortes a la financiación, en noviembre o diciembre. Y Arzallus ha amenazado con denunciar el Estatuto. Si fueran en serio, sólo podríamos decir: ¡Adelante!. Pero

como no van en serio y sólo pretenden, una vez más, negociar las migajas, hablamos de demagogia. Pero de una demagogia interesada, porque su confrontación con el gobierno central, para la que reclaman el apoyo de toda su nación, sólo busca reforzar su propia política, hecha en provecho de una minoría. Los ejemplos de la financiación y de la ley de policía nos sirven para ilustrar lo que decimos.

El secretario de Estado de Hacienda, señor Borrell, declaró hace unos meses: "...hay administraciones especializadas en la enseñanza y la sanidad como las autonómicas, y otras especializadas en defensa como la central. Entonces la verdadera polémica... será más una polémica entre si gastar más en enseñanza o en defensa..." El cínico argumento del Sr. Borrell, firme partidario de los gastos militares, nos acerca, sin embargo, a la verdad. El problema es triple: quién tiene el dinero, dónde se gasta y cómo se gasta. El nacionalismo burgués se enfrenta al gobierno —parcialmente— por el primero de estos temas, pero quiere hacer olvidar los otros dos, que son cruciales para las clases populares: PNV y CDC son firmes partidarios de la permanencia en la OTAN, de los gastos en armamento y no tienen nada que decir cuando el gobierno regala a los banqueros del Urquijo una cantidad de millones equivalente a la que recorta al conjunto de las autonomías. De modo parecido, buscarán enfrentarse al gobierno por la cesión o la participación en el IVA, pero no han dicho una palabra sobre el carácter regresivo y antipopular de este impuesto que, además, viene impuesto por nuestra entrada en el Mercado Común

de la que el PNV y CDC son fervientes partidarios.

Algo parecido ocurre con la ley de policía. Se rechaza el Consejo de Política de Seguridad porque interfiere en la policía autónoma, pero dicen conformarse con que quede abierta la posibilidad de una sustitución a largo plazo de las fuerzas de seguridad del Estado. No se dice nada contra el mantenimiento de la militarización de la policía, de la negación del derecho de huelga y del reforzamiento de las competencias de la guardia civil, o de la creación de una guardia civil femenina. Al fin y al cabo, a los señores de Convergencia y del PNV también les interesa asegurar que se mantiene la ley y el orden.

FRENTE a estas actitudes del gobierno y de los nacionalistas burgueses, los "socialistas de la periferia" se encuentran ante contradicciones desgarradoras. Por una parte están obligados a dar un apoyo global al gobierno (y no dudan en hacerlo en temas como austeridad, MCE, OTAN y antiterrorismo) pero, por otra, deben evitar un desgaste excesivo en Comunidades en las que gobiernan (como Andalucía, Valencia...) o donde el nacionalismo puede arrancarles todavía más votos, como es, particularmente, el caso de Catalunya. Esto explica malabarismos como los que intenta realizar el PSC. Raimon Obiols, su primer secretario, ha declarado encontrarse muy preocupado por el peligro de que Catalunya se convierta en una "nacionalidad deslizante": bien hacia una confrontación permanente con el gobierno central o bien hacia la disolución en un Estado centralista. Pero la única solución que se le ocurre es un nuevo intento de cuadratura del círculo, a base de pequeños arreglos en los mecanismos existentes (la Constitución, el Estatuto y la LOFCA) los mismos que, de modo inexorable, mantienen a Catalunya prisionera del centralismo.

No mucho más imaginativos se han demostrado dirigentes del PSUC, como Solé Tura, para quien la solución a la crisis autonómica consiste en utilizar de manera distinta los instrumentos existentes (Constitución, Estatut y LOFCA), para avanzar hacia un Estado Federal del tipo de la RFA. El avance hacia un objetivo tan pobre y limitado como éste, quizá sea posible en el terreno literario, de los textos legales, pero pasa completamente por alto la dinámica que les confiere su inserción en el entramado institucional y de poder existente al que en ningún momento quieren cuestionar. En todo caso, deja sin abordar el problema de fondo: la libertad de las nacionalidades oprimidas por el Estado centralista español.

ANTE el importante problema que plantea el reciente estallido de la crisis autonómica, los diversos movimientos de masas deben desarrollar una oposición decidida a los proyectos del gobierno y una desconfianza sistemática hacia los nacionalismos burgueses y hacia la izquierda reformista. Deben dotarse de una orientación y de una política propias, que partan del convencimiento de que la lucha contra las agresiones centralistas y por las libertades nacionales plenas, no sólo es necesaria, sino que debe ir íntimamente ligada a la lucha contra la austeridad, el rechazo al Mercado Común, la salida de la OTAN y la oposición a la creciente militarización de la sociedad. Impulsar esta política propia y traducirla en acciones de masas es la tarea que nos proponemos los comunistas. □

La OTAN, los "chips" y el Pato Donald

El gobierno socialista quiere integrar el Estado español en el imperialismo por todos los medios y en todas las estructuras. No es sólo que le mantenga en la OTAN o haya conseguido la entrada en la CEE, sino que se trata, además, de lograr la occidentalización más completa de las posibles. ¿Qué mayor occidentalización puede haber que la llegada de ATT, la instalación de Disneylandia en el litoral mediterráneo, la participación en el avión de combate europeo, en el proyecto Eureka y en la Guerra de las Galaxias?. Porque ni siquiera esto último ha sido descartado por el Gobierno. Con todo ello, el gobierno socialista trata de ganarse la confianza del imperialismo incorporándose en cuerpo y alma a su desarrollo, pero también intenta hacer irreversible la permanencia en la OTAN, intentando mostrarnos que no todo es malo. La OTAN, parece querer decirnos, es también los "chips" y el pato Donald. ¿Por qué perderlos?.

Jesús Albarracín

Mientras en Estados Unidos se procede a uno de los despidos masivos más importantes de los últimos años, ATT, la poderosa multinacional American Telegraph and Telephone, punta de lanza de la tecnología mundial en el campo de la microelectrónica, ha decidido instalarse en el Estado español. Un "éxito" del gobierno socialista, en particular de Solchaga y Luis Solana, no sólo por haber conseguido que una empresa española como Telefónica vaya a compartir los altos secretos de la tecnología occidental (ATT no está instalada en ningún otro país de Europa), sino también porque, como en los vinos, la denominación de origen es tan importante como el contenido. Con el visto bueno de Reagan, ATT acaba de concederle al Estado español en general y al gobierno socialista en particular, la denominación de origen de "país occidental en el que se puede confiar". Con toda seguridad será una baza de Felipe en los debates parlamentarios del otoño.

ATT, Solana y los países adversarios

ATT-Microelectrónica de España será la empresa productora del acuerdo de ATT con Telefónica. Instalada en el norte de la provincia de Madrid, se dedicará a producir "chips", ese objeto más pequeño que un sello de correos capaz de contener una cantidad enorme de información. Los "chips", elementos básicos de la tecnología actual, son fundamentales en las modernas redes de comunicación, en la fabricación de los ordenadores, en la de los robots industriales y, naturalmente, en la industria militar. El Estado español obtiene, por lo tanto, una tecnología realmente de vanguardia. Si se tiene en cuenta que, además, continúan las negociaciones entre ATT y Telefónica para que esta última instale un centro de diseño de "chips" propio, se comprende la importancia que le da el Gobierno y

que puede tener para el capitalismo español. Pero no es oro todo lo que reluce.

ATT pone la tecnología y prácticamente nada más. En efecto, la inversión necesaria es de 200 millones de dólares, de los cuales el capital es solamente de 52, un 80% del cual será de ATT, que así controlará de forma absoluta la empresa. El resto hasta los 200 los pone el Estado español: los terrenos los aportará gratuitamente la Comunidad Autónoma de Madrid, 60 millones de dólares son de subvenciones del Estado, 75 de acceso fácil al crédito de la banca y el sistema financiero, etc. Pues bien, con esta inversión que costará más de 30.000 millones de pesetas se montará una fábrica altamente contaminante —el Silicón Valley, que es donde se producen los "chips" en Estados Unidos, es una de las zonas más contaminadas del mundo— y se dará empleo solamente a 634 personas.

Pero esto no es todo. Los "chips" son básicos para la industria militar y esto implica algunas condiciones adicionales. La primera, aunque Luis Solana lo haya negado, es el compromiso que debe existir para que en la empresa no entre ninguna persona de "ideología comunista". Con tan poco personal y tan altamente cualificado, presumiblemente, la condición se cumplirá. La segunda, y dado que el Estado español no pertenece aún al COCOM —el órgano encargado del control de la tecnología de la OTAN— es el compromiso de guardar celosamente la tecnología. Según la prensa, el acuerdo ha necesitado el visto bueno de Reagan, lo que ha requerido una carta de Solchaga, cuyos términos han sido negociados previamente entre las autoridades españolas y las americanas. No se conoce esa carta, pero los términos podemos imaginárnoslos.

Recientemente, una empresa española de microelectrónica, Piher, ha sido condenada en Estados Unidos por haber reexportado tecnología



de vanguardia a Cuba y la URSS. El gobierno español habrá dado todas las garantías necesarias para que con el caso de ATT no ocurra. Después de todo, como ha dicho Luis Solana, "un país como España, que es miembro de la OTAN, también debe defender, lógicamente, que sus productos no lleguen a estos países adversarios". El señor Solana debería entender que, dado que la mayoría de las gentes de los pueblos del Estado español no quieren tener los mismos países adversarios que él, la solución no son cartas de garantía, sino salir de la OTAN. Aunque ello cueste que ATT se vaya.

Participar en todo lo que huelga a militar

Pero la "occidentalización" no acaba con ATT. El cuento de absorber la alta tecnología occidental le está sirviendo al gobierno de Felipe González para incorporar al Estado español a todos los proyectos de investigación militar de la OTAN, incluida la Guerra de las Galaxias de Reagan, porque, puestos a participar, los socialistas están dispuestos a participar en todo.

Con el tema de la Guerra de las Galaxias, Felipe González ha practicado la yenka. Primero no descartó la participación española, porque "no se puede estar al margen del proyecto tecnológico más importante". Muy poco tiempo después, en su viaje a China, lo condenó abiertamente, por "no contribuir a la paz mundial". Pero más tarde, el Gobierno ha creado una comisión para estudiar el proyecto. Hay que señalar que la participación en la Guerra de las Galaxias no podría ser de la administración española, sino de las empresas y, en este

sentido, no es sólo la creación de la mencionada comisión el único síntoma de que se piensa participar en el proyecto. En efecto, el Ministro de Industria ya ha dicho que "la integración en el COCOM es inevitable a medio plazo", que "es el camino menos incómodo para España", que "hay que aceptar las reglas de control sobre reexportación de tecnología", etc. Indicadores todos ellos de cuáles son sus intenciones.

Pero esto entra en el terreno de los proyectos del Gobierno. Lo que sí es seguro es la participación en el proyecto Eureka —que desde luego no es únicamente un proyecto civil— y en el avión de combate europeo, con Gran Bretaña, RFA e Italia. En Construcciones Aeronáuticas, empresa cada vez con un carácter militar más acusado, no caben de gozo. Ya está "absorbiendo tecnología" con el proyecto Airbus; tienen un contrato con McDonnell Douglas a cuenta de la contrapartida por la compra de los 72 FACAS y, ahora, ¡el 13% del avión de combate europeo! Para las pensiones no hay fondos, pero para participar en "los proyectos de tecnología militar avanzada" y en la construcción de juguetes para la guerra, desde luego, el Gobierno no para.

De la mano del Pato Donald

La "occidentalización" no tiene por qué venir solamente de la mano de la tecnología. Puede hacerlo también de la mano del pato Donald, sobre todo si éste viene con un pan debajo del brazo.

Disneylandia es mucho más que un parque de atracciones. Por su tamaño, por la tecnología avanzada que aplica a las diversiones, por el

enorme coste de su construcción —200.000 millones de pesetas en el caso del parque para Europa que planea Walt Disney Productions—, por los millones de visitantes que lo hacen cada año en cualquiera de los tres existentes hasta la fecha —California, Florida y Japón— y por la maquinaria de reproducción de la más reaccionaria ideología capitalista que supone, no tiene comparación con cualquier otro parque de atracciones existente en el mundo. La construcción de una Disneylandia para Europa supone beneficios para muchos capitalistas, miles de puestos de trabajo en su construcción y el desarrollo para una zona geográfica entera. No es extraño que en estas condiciones los gobiernos francés y español se lo disputen hasta el punto de que el Secretario de Estado para el Comercio español haya considerado "top secret" las ayudas ofrecidas a Disney, pues "si se descubriera nuestra oferta se daría ventaja a Francia".

Pero, más allá de su importancia para el capitalismo español, Disneylandia tiene una importancia política: entrar en la OTAN es ATT, es Disneylandia, son miles de puestos de trabajo, salir de la OTAN es perder todas estas ventajas que nos brinda el mundo desarrollado. No importa lo que cueste. No importa los terrenos que habrá que regalar a Disney, las subvenciones que habrá que hacerle, cuanto habrá que rebajar las pensiones para ello. Para el gobierno es muy importante que el pato Donald se instale en el País Valencià o en Catalunya, porque piensa que con ATT, la Guerra de las Galaxias, el avión de combate europeo y el pato Donald, la permanencia en la OTAN es mucho más irreversible. □



El N° 388 de Zutik!-Combate no se distribuyó en Bizkaia

Habitualmente las páginas de Zutik! escritas en euskera aparecen sobrecargadas de erratas y fallos ortográficos, hasta el extremo de que muchas veces resultan ininteligibles. Este es un hecho, por grave y repetitivo, preocupante, que hace cuestionar el lugar de nuestra prensa en la recuperación de un idioma nacional que sigue estando oprimido. Y es motivo de permanentes explicaciones y excusas ante los lectores euskaldunes, que constituyen un porcentaje bastante alto de los lectores del periódico.

Sin embargo, el último número de Zutik!-Combate, y fundamentalmente su portada (un saludo veraniego y un llamamiento para un otoño caliente) aparecía tan agredido por las erratas, era tal la desnaturalización del euskera, que optamos por no distribuir el periódico en Bizkaia y devolver los ejemplares al origen.

Un partido que se precia de internacionalista, que reconoce que Euskadi constituye una nación diferente, que inscribe en su programa el derecho a la independencia vasca; no puede desdecirse en la práctica (y es práctica revolucionaria hoy día el aprendizaje y utilización del euskera) con este tipo de descuidos, no intencionados, por supuesto, pero que constituyen objetivamente un desdén para un esfuerzo colectivo (la recuperación del idioma) del que formamos parte.

Esta crítica no significa, en absoluto, una falta de reconocimiento del esfuerzo de todo el equipo que escribe, diseña, produce nuestro periódico. Antes bien, porque pensamos que es un esfuerzo valioso y útil, porque valoramos mucho nuestro Zutik!-Combate, es por lo que planteamos que se tomen las medidas necesarias para que no resulte estéril.

Comité Provincial de Bizkaia

La negociación y sus circunstancias

Como el Guadiana, el tema de la negociación política entre ETA y el Estado aparece y desaparece, según coyunturas y circunstancias diversas. Esta vez ha saltado a consecuencia de una histriónica polémica entre Arzallus y Bandrés, dejando de lado a los desencadenantes y poniendo en el centro el hecho y la existencia de las organizaciones armadas. Y, evidentemente, con ellas la raíz del problema: la persistencia de un problema nacional irresuelto, por más que intenten prohibirla la Constitución y derivados estatutistas. Ahora bien, el tema de la negociación tiene siempre dos aspectos: 1. Coyuntural y ajustado a su posibilidad o actualidad práctica; 2. De exigencia o reivindicación de un medio para alcanzar unos fines.

J.I. "Bikila"

La idea de la negociación para unos y para otros ha estado situada siempre en la consecución de unos objetivos. Desconozco los que motivaron a los sucesivos gobiernos y partidos a tener contactos con ETA (aunque es posible entrever cuáles fueron en cada momento). Por parte de ETA, según repetidas explicaciones, la cuestión estriba en la búsqueda de un entendimiento sobre la base "razonable" de una alternativa circunscrita al terreno democrático; cual es la alternativa KAS, en la medida de que el Estatuto no lo es.

El problema —una vez más— no está en la justeza de unas reivindicaciones ni en su "razonabilidad", sino en su viabilidad política. Desde el punto de vista de la defensa de una oferta razonable y justa, la negociación es un instrumento correcto, y, usado adecuadamente, da fuerza a quien en esta contienda tiene la razón y, además, demuestra tenerla. Sirve para contrarrestar la demagógica propaganda sobre la paz, en el sentido de que ésta se asienta sobre bases democráticas, y no sobre la ley de la mordaza o del cementerio. Todo ello, siempre y cuando no se decaiga en la ilusión de que la negociación va a ser algo inmediato, algo a corto plazo.

Esto es así por una razón sencilla. Porque el Gobierno central no quiere negociar, y no lo hará mientras no cambien las coordenadas políticas. Lo cual supone un cambio de la correlación de fuerzas entre Euskadi y el centralismo (y dentro de Euskadi entre los que defienden consecuentemente la soberanía y los que la venden); y, a escala estatal, entre el gobierno y los poderes fácticos respecto a la clase obrera y demás sectores populares (lo cual significa a su vez que cambie la correlación de fuerzas entre reformistas y revolucionarios solidarios con Euskadi). Sin que entre lo uno y lo otro tenga que existir una dependencia mecánica o inmediata.

Por tanto, las razones dadas por el Gobierno vasco para negar actualidad a la negociación son conscientemente falsas, pues ellos saben muy

bien dónde radica el problema: no en ETA, sino en Madrid. Otra cosa es que ETA, mientras los otros no den muestras, guarde la ropa con toda la razón del mundo, pues sería suicida entrar al trapo de unas relaciones que sólo ofrecen el arrepentimiento, la claudicación a cambio de un vergonzante perdón que, encima, lo hacen purgar hasta el límite. Que ETA pida la negociación no sólo es legítimo, sino razonable (a ellos les toca saber cuándo les conviene). Que HB defienda su necesidad actual, es igualmente legítimo. Que esto sea alcanzable hoy es harina de otro costal.

El "Santa Santorum" de la legitimidad democrática

Dejando de lado la especulación sobre la actualidad y posibilidad de la negociación, quisiera centrarme, sobre todo, en el llamado problema de las legitimidades democráticas, pues tras él se esconde la más falaz de las mentiras, y la más rotunda de las hipocresías. En primer lugar, porque aquí y en Pernambuco, lo que es legítimo o ilegítimo no lo dicta en última instancia la

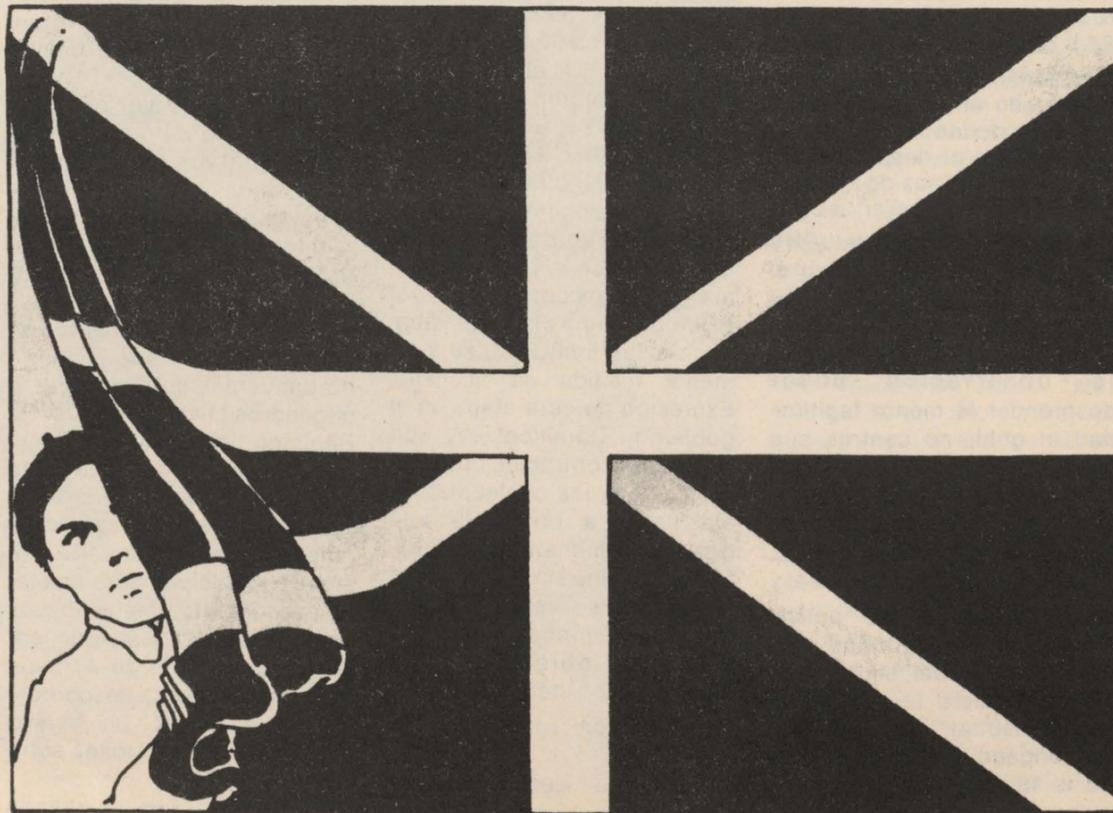


letra de las constituciones —por otra parte reformables y, por tanto, KAS-esables— ni los supuestos ético-morales proclamados como universalmente válidos —como les gusta a los Savater y a los "Aisedos" SA— sino en la relación de fuerzas político-sociales.

En segundo lugar, sobre la aceptabilidad o no de los métodos de presión, de lucha o de acción, ocurre otro tanto. Los que aquí niegan la legitimidad del uso de las armas y, en consecuencia a quienes las usan, aceptan ese juego en otros países —donde hay elecciones, constitución y todo lo demás, por ejemplo, Colombia—. Los que dicen ser inmorales ceder ante las armas, su convicción moral se asienta de hecho, en la existencia de otras armas. Tanto Fraga como Suárez negaron con rotundidad la amnistía para los "delitos de sangre", pero dos Huelgas Generales sacaron de las cárceles a los "tipificados" allá por el 77. Los que dicen no ceder ante la presión de las armas, dijeron en su tiempo que no reconocerían a los que se "legitimaron con la

sublevación militar del 36", pero terminaron negociando con ellos la transición (adiós ruptura democrática), llegando hoy a reconocerles como el único ejército legal a efectos de pensiones, aún a costa de mantener en lá miseria a militares republicanos.

Xavier Arzallus, que de negociaciones sabe latín ha afirmado que "trás el 23-F tanto el poder como la oposición cedieron ante los círculos golpistas en un pacto de drásticas rebajas autonómicas". Es decir, lo que se llamó la LOAPA. Lo que no dice el Sr. Arzallus es que, tanto él como su partido, lo han hecho cuantas veces ha sido necesario, con el Estatuto al principio, con el Pacto de Legislatura recientemente y, así, cuantas veces haga falta, para que les dejen respirar el aire de esta democracia. En cualquier caso, el problema es que se considera política realista (por tanto legítima) ceder ante unos, e inmoral e inadmisiblemente ante otros. Ya se sabe, pocos se escandalizan de que se pida amnistía camuflada para Milans del Bochs, pero sí para los revolucionarios de ETA. □



¿Denunciar el Estatuto? ¡Adelante!

Etorre

Se ha abierto una nueva crisis en las relaciones entre el Gobierno Vascongado y el Gobierno Español, relaciones que parecían discurrir sobre ruedas tras la firma del pacto de Legislatura, hace poco más de seis meses.

No es sólo, que la virulencia dialéctica se ha mantenido solamente durante este tiempo por parte de los dirigentes del PNV, no vinculados formalmente por dicho Pacto (Arzallus, Uzturre...), sino que, y esto es lo significativo, desde el propio gobierno Ardanza han empezado a alzarse las quejas y agravios, a decir que "lo que está ocurriendo es gravísimo y las consecuencias pueden ser imprevisibles", a avisar que "Madrid está jugando con fuego", en definitiva, a amenazar con romper la baraja.

Los motivos inmediatos que han desencadenado esta crisis son, como siempre más mezquinos y prosaicos que las declaraciones. En primer lugar, la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), —que parece haber sorprendido a los perspicaces economistas del PNV, cuando de su implantación paralela a la entrada al Mercado Común se tenían noticias desde hacía lustros— que, al parecer, según las intenciones que tienen por Madrid, pondría en cuestión el mecanismo recaudatorio previsto en el Concierto Económico, hipotecando la Autonomía y con ello la pésima gestión que está realizando el PNV a través del gobierno vasco y diputaciones (vayan como ejemplos: el actual conflicto de profesores de EGB que afecta a la calidad de la enseñanza pública; el tan injustificado atraso en la incorporación de las ikastolas a la red pública; el despilfarro de ETB; las denuncias de irregularidades y prebendas en la Diputación de Bizkaia... (el PNV salta porque ve en peligro el hasta ahora abundante flujo de dinero que le ha reportado el concierto). Sin que de esto la observación pueda desprender la menor legitimidad al gobierno central, aún más ladrón, corrupto y despilfarrador, para apropiarse del dinero que sale del bolsillo del trabajador vasco.

El segundo motivo es el proyecto de ley de policía (fuerzas de seguridad del Estado) en el cual, sin haberse tenido siquiera la delicadeza de consultar al gobierno vascongado, tal vez porque ya nadie lo tiene en cuenta, se reduce el ámbito de actuación

de la Ertzantza, y además queda bajo el mando del gobierno español, a través de un **consejo de política de seguridad presidido por el ministro del interior**; y en lo operativo por los mandos de la guardia civil o policía armada, perdón, nacional, en caso de colaboración. El recorte es sus-tancial, aunque el PNV se opone al mismo en base de disputar algunas pequeñas competencias, y no al abandono del territorio vasco de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (única ley de FES que resultaría justa).

Paradójicamente, a los seis meses de inaugurar "una nueva forma de gobernar en Euskadi", el aburrido señor Ardanza se encuentra "gobernando" de la misma forma que el defenestrado Garaikoetxea: una combinación de amenazas verbales y advertencias a Madrid con la búsqueda subterránea de nuevos acuerdos, negociaciones, etc., para gestionar lo poco que se tiene. Aunque a Ardanza le falta la planta y categoría de su predecesor, todo hay que decirlo.

El Pacto, en entredicho

La razón de que los dos primeros años de gobierno PSOE fuesen tan tensos con las instituciones autonómicas vascongadas, hay que buscarla en el Pacto de la Zarzuela: esto es, en el compromiso entre los partidos españoles, el ejército y el Rey, a la salida del golpe de Tejero, para reconducir "los procesos autonómicos y evitar la disgregación de la llamada 'nación española'". El PSOE ha sido el albacea fiel de este compromiso, con su política de armonización autonómica (aunque la LOAPA ha resultado inconstitucional) combinada con una enérgica represión. Consciente de ser la primera víctima de esta contrarreforma, el PNV opuso una cierta resistencia, en las instituciones y en menor medida en la calle. Expresión de esta etapa es el gobierno Garaikoetxea, con todas sus contradicciones. La principal de las cuales es que sin llegar a conseguir una gestión mínimamente satisfactoria desde el nacionalismo moderado, se estaba alimentando un proceso, por lo demás objetivo, de descontento nacionalista y radicalización independentista.

La firma del Pacto de Legislatura con el PSOE



suponía un cambio de rumbo en la política del PNV. Analizamos en su momento* el contenido y precio de este Pacto, y lo denominamos **Pacto de Claudicación**; ya que de eso se trataba, de una claudicación sin paliativos. Pero al mismo tiempo había que preguntarse el por qué de ese pacto, las razones a las que obedecía. Como dijimos en su día, había que entenderlo como una solución pragmática, un "jugar a las cartas del posibilismo" en la gestión institucional, aún sabiendo que se trataba de una salida transitoria y endeble"; en cierto modo, una tregua, en tanto se cerraban las profundas heridas que había dejado la crisis profunda del PNV, se ponía en marcha a un gobierno y parlamento autónomo paralizados y, tal vez, se preparaban otras soluciones para las próximas elecciones. El Pacto ha tenido utilidad para el centralismo: se han impuesto símbolos monárquicos y se han desactivado momentos de resistencia (una nueva guerra de banderas), se han pactado engendros tales como la ley de Régimen Local, etc. Todo ello ha sido muy malo para la lucha del pueblo vasco. Pero el Pacto no ha sido suficiente como para extenderlo al ámbito municipal, para acallar el descontento de las bases nacionalistas (y basta con leer cualquier artículo de Arzallus para descubrir ese descontento), para evitar un nuevo encono en las relaciones entre el PNV y PSOE...

Ahora, a la luz de los últimos

conflictos, se empieza a hablar (incluso por algunos de aquellos que se impresionaron por el giro definitivo del PNV...) de que el Pacto ya está sentenciado, que tiene un plazo, que las elecciones están a la vuelta de la esquina... Tal vez. Aunque bueno será una vez más recordar que la política del PNV viene determinada por unas coordenadas concretas, por un tipo de contradicciones que están por encima del maquiavelismo de sus dirigentes, y que el pragmatismo, la ambigüedad, o como se quiera llamarlo, no es sino reflejo de todo ello.

El fondo de la cuestión

Escribía Arzallus, al comienzo de septiembre: "el llamado Pacto de Legislatura no puede ocultar la constante erosión de los contenidos autonómicos del Estatuto vasco... Si además de lo concedido por vía legal y de hecho, el gobierno central sigue con la misma política en Euskadi..., habrá que preguntarse cuánto tiempo hará falta para que se agote la responsable paciencia del PNV y se proceda a la denuncia del Estatuto de Gernika. Y quedará por ver cómo se las arregla el PSOE para gobernar en Euskadi con todo el nacionalismo político y sociológico en radical oposición... Por-que la primera base para que en Euskadi haya paz es

una autonomía profunda. Más allá aún de la que el present Estatuto ofrece".

No son las palabras de un nacionalista radical, o en camino de serlo, sino las de un político frío, comprometido hasta el cuello en un proyecto de normalización política de Euskadi, que no ha dudado para ello en sondear alianzas con el diablo, con el Rey, el ejército, la derecha, la izquierda estatal e internacional... ¿denunciar el Estatuto de Gernika?. ¡Adelante!. Pero no hay miedo, no lo harán. Sería reconocer su fracaso estrepitoso, reconocer las razones por lo que la izquierda consecuente y abertzale ha venido, hemos venido, rechazando el actual marco institucional y político.

Sin embargo las palabras de Arzallus señalan el fondo del problema: el agotamiento de la vía estatutaria iniciada en la transición, de por sí estrecha, cotidianamente regateada desde el poder central y desde el 23 de febrero sustancialmente recortada. Ya no vale decir que se vuelva al Estatuto inicial, porque las lamentaciones de hoy son herederas legítimas de la aceptación de un marco político e inconstitucional que sustituyó al franquismo, y es ese marco el que resulta incompatible con la soberanía o incluso con una "autonomía profunda" del pueblo vasco. □

(*) N^os 368 y 369 de este periódico. Enero-febrero de 1985.

UNIVERSIDAD, COMIENZO DE CURSO

Fortalecer el movimiento, organizar la protesta

Leopoldo Moscoso

Después de un verano, en el que el Gobierno suprime las tasas de COU —con lo que supone de intento de desmovilización de la Enseñanza Media— y después de que la subida de las tasas académicas en la Universidad no ha resultado ser tan fuerte como el conjunto del Movimiento esperaba, cualquiera podría pensar que las cosas tienen algunos visos de cambiar.

Nada más alejado de la realidad. La pequeña subida que han experimentado las tasas no es, en primer lugar, una conquista de las movilizaciones estudiantiles del curso pasado. De lo que sí forma parte esa pequeña subida —de eso estamos seguros— es de una sutil estrategia de financiación de la Universidad.

¿Qué podemos decir entonces frente a esta desconcertante actitud del Ministerio en el terreno de la financiación de la Universidad?. Pues, en primer lugar, habrá que decir que, a pesar de que esta subida fue pequeña —en torno al 9%— se sitúa por encima

del nivel de la inflación prevista para este año (un 8%). Habrá que decir también que suban mucho o poco las tasas, el caso es que siguen subiendo, porque este alza escalonado de las mismas, responde a un proyecto a largo plazo y este proyecto consiste en que sean los estudiantes los que progresivamente vayan soportando la mayor parte del coste total de su plaza. Habrá que decir también, como venimos diciendo hace tiempo, que mientras en este país nos embarcamos en proyecto de aviones de combate y los gastos de defensa no tienen visos de reducirse, el porcentaje del PNB destinado a la educación se sitúa en torno al 2%, frente a una media situada en torno al 6% en el resto de los países de la CEE.

La progresiva reducción de la aportación del Estado a la enseñanza, apunta a que la Universidad deje de ser un servicio pública y financiado con fondos públicos, es decir, existe el peligro de que la Universidad se privatice cada vez

más. El progresivo aumento del porcentaje del coste total de la plaza que cada estudiante desembolsa, es otro dato que permanece invariable. Reducir los gastos del Estado en materia asistencial y en concreto en el sector de la enseñanza es ya una necesidad para un gobierno que ha optado por hacer política de espaldas a los intereses de la mayoría de la población; de espaldas a aquellos a los que les cuesta más pagar las tasas.

Pero no debemos olvidar problemas que aparecen al margen de las tasas, pero que no son nuevos. La cuestión del numerus clausus fue ya motivo de conflicto en algunos distritos universitarios durante el curso pasado y estamos seguros de que cada vez habrá más problemas con esto.

Tenemos que estar preparados para afrontar situaciones cada vez más conflictivas especialmente en las Universidades más masificadas. Habrá que decir al gobierno que se gaste más dinero en cubrir las plazas universitarias que los estudiantes reclamen. Habrá que decir al gobierno que responda a la demanda cultural-académica real y socialmente existente. Admisión total en primera opción, ésta será nuestra posición allí donde existan problemas de este tipo.

Las perspectivas: de Sevilla a Valencia

A la Coordinadora Estatal de Estudiantes que se reunió en Sevilla a finales de marzo, íbamos con la experiencia de una jornada de movilización de influencia desigual. Para el próximo curso y frente a las nuevas agresiones que sin duda se nos vienen encima, habrá que generalizar las protestas en todo el Estado, haciendo todo lo posible por incorporar a la movilización a sectores cada vez más amplios de los estudiantes. E intentando también alcanzar niveles más altos de coordinación entre los movimientos estudiantiles de la Universidad y los de una Enseñanza Media (que en la última protesta se mostró especialmente combativa) para la que sin duda —a pesar de la supresión de las tasas de COU— las cosas no van a ser más sencillas que para los universitarios en el próximo período.

En Sevilla se vislumbraban ya avances en el nivel de coordinación entre los estudiantes por medio de asociaciones u otras vías. De cara a la reunión de Valencia, prevista para Noviembre, habrá que seguir dando pasos en este sentido. También habrá que pensar en avanzar

en el nivel de integración de las asambleas de estudiantes afectados por el numerus clausus: los no admitidos. Su integración en los órganos de expresión del Movimiento deberá tender a ser más eficaz y operativa de cara a que sus reivindicaciones no se disocien de las reivindicaciones centrales del movimiento, dado que unas y otras pertenecen a un mismo problema y por lo tanto se trata de una misma lucha. Su protesta debe integrarse en los cauces de la protesta del conjunto del Movimiento.

Por otro lado, será necesario que en cada frente de acción se completen los ejes del programa reivindicativo propuesto por el CADUS en la reunión estatal de Sevilla, con cuestiones parciales que afecten de manera específica a cada centro, sin olvidar nunca el punto de referencia general: la lucha por una Universidad pública financiada con fondos públicos.

De cara a la reunión de Valencia habrá que pensar, en primer lugar, en el hecho de que es prioritario ir fortaleciendo la unidad de los sectores que apoyaron en Sevilla el programa propuesto por el CADUS. Tendremos que intentar también desde esa Coordinadora, que el Movimiento asuma para el curso que viene reivindicaciones ya no específicamente académicas, pero si fácilmente relacionables con los ejes de la protesta del movimiento estudiantil. Desde la Universidad y desde los diferentes órganos de coordinación de los estudiantes habrá que apoyar la campaña por la salida de la OTAN que ha decidido la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas. Habrá que explicar que en este país el gobierno se gasta el dinero en armas y no en atender a la demanda cultural o la calidad de la enseñanza y que, por lo tanto, el Referéndum por la salida de la OTAN no es un problema ajeno a los universitarios o a los estudiantes de la Enseñanza Media.

Valencia será el punto de encuentro de un movimiento estudiantil que esperamos se vaya fortaleciendo desde el comienzo de curso y será también el lugar donde habrá que recuperar como tarea prioritaria un alto nivel de acuerdo en torno a los objetivos y formas de coordinación de los estudiantes en todo el Estado, que se diferencian entre sí en muchas cosas pero que también se ven agredidos —todos ellos— por la misma política gubernamental. Nuestra tarea inmediata ya desde el comienzo de curso será, por lo tanto, fortalecer la unidad del movimiento, organizar, extender y generalizar la protesta. □



SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID):

Los vecinos contra el caciquismo "de izquierdas"

El pasado jueves día 12 a las 7 de la tarde, 450 personas se concentraron a la puerta del Ayuntamiento de S. Fernando de Henares (Madrid) para repudiar la sanción de 20 días de empleo y sueldo impuesta al ginecólogo del "Centro de Salud" del pueblo y entregamos 1.000 firmas en solidaridad con él. Dos horas antes, en una negociación con CCOO, el Ayuntamiento pasó de 20 días a 10, luego a 5 y finalmente lo dejó en una sanción simbólica de dos días de empleo y sueldo. La movilización solidaria de los trabajadores del Ayuntamiento, de los vecinos y, fundamentalmente, *el apoyo de las mujeres desde la puerta del Centro de Salud*, la firmeza con que la sección sindical, la Unión Comarcal y el Sindicato provincial de la administración de CCOO han apoyado al trabajador, habían conseguido una victoria. Puede ser que el equipo de gobierno dirigido por el PCE se desdiga de la frase favorita de su responsable para las negociaciones es "yo soy sindicalista desde hace 24 años y no vamos a aceptar nada, ni negociaciones si se produce alguna presión". Entendió bien el JR el mensaje de la patronal.

Corresponsal



El conflicto arranca de hace 3 meses cuando el Ayuntamiento pretendió cubrir los servicios médicos de las piscinas con los médicos del "Centro de Salud". El ginecólogo consultó al comité de empresa y a CCOO, negándose finalmente al traslado porque significaba abandonar el servicio de planificación familiar y en concreto la consulta y la atención a las mujeres. El equipo de gobierno municipal, compuesto por 6 de los 17 concejales, con el peor estilo patronal sancionó con 20 días de empleo y sueldo al trabajador, cuatro días antes de las vacaciones de agosto.

La organización de la respuesta popular

Ya entonces, comité de empresa y sección sindical de CCOO nos encerramos en el despacho del Sr. Alcalde y colocamos pancartas tratando de evitar la sanción. En septiembre continuó la movilización, recogiendo firmas desde la puerta del Centro y llamando a la protesta ciudadana. La actitud del trabajador sancionado es totalmente justa, rechazando desplazarse de su centro de trabajo y garantizando plena y normalmente el funcionamiento de la consulta de planificación familiar a lo largo del mes de julio.

Durante el período de sanción, la atención a las usuarias de planificación familiar se ha producido de una manera anómala, dado que no se está respetando ningún criterio serio, ni la persona que lo hace está cualificada profesionalmente para ello.

La pretensión de los concejales de que el "Centro de Salud" atienda el servicio de las piscinas municipales, significa abandonar los criterios progresistas que han animado la labor del "Centro de Salud" y sustituirlo por unos criterios de rentabilización económica: tres años de una importante labor entre 2.000 mujeres que no debe malograrse. Además, la sanción al ginecólogo representa una escalada en las agresiones contra los derechos laborales, sindicales y sociales de los trabajadores del Ayuntamiento; de hecho todos los problemas laborales de reclasificaciones, horas extras, situación del "patronato", problemas individualizados están sin resolver, y con esta medida de represión intentan dividir y amedrentar a los trabajadores del Ayuntamiento.

El éxito de la movilización del día 12 es indudable, no pueden agredir impunemente

a los trabajadores sin una respuesta sindical contundente, por muy "comunistas" que se llamen. Después del día 12 es posible que debamos ir de nuevo a la movilización, con más fuerza, con más contundencia.

Un balance positivo

Una primera valoración de los elementos, que se escapa de este conflicto nos dice cosas positivas. Es la primera

vez que se produce una movilización solidaria con los trabajadores del Ayuntamiento, y esto favorece acercar los problemas laborales de la administración a los vecinos y romper la lógica reaccionaria de vender entre la población la imagen de "trabajadores privilegiados" que trabajan poco y ganan mucho. A pesar de todas las acusaciones de que nuestra movilización tiene un trasfondo político, de que es producto de la pelea interna

entre distintos sectores del PCE, la realidad es que por primera vez en años un sector social de San Fernando se pone en la calle, en la puerta del Ayuntamiento, abriendo la vía a una más amplia oposición a los elementos regresivos de la gestión municipal.

Es cierto que en el pueblo hay contrapuestos intereses políticos, pero esto es legítimo y no anula el hecho objetivo de que la dinámica de movilización de cerca de 500 personas,

con la comprensión de la mayoría de los vecinos de nuestro pueblo, es positiva.

Caciquismo "de izquierda"

Hay otros valores políticos que se han desarrollado, como los siguientes: contra la mentalidad que el PCE ha sembrado entre la población de que cualquier movilización contra las decisiones de la corporación es una movilización de "derechas", aquí estamos. Hay que arrinconar el sentimiento de impotencia, de que nada se puede hacer: tenemos que empezar a movernos con imaginación. Nuestro pueblo es muy bonito y se merece lo mejor. Hoy somos más los que pensamos que hay que tener una actitud sindical combativa, hoy somos más los que pensamos que hay que desarrollar la conciencia crítica entre los vecinos, para la solución de los problemas frente a los sembradores del colaboracionismo.

Otro elemento que con toda claridad ha surgido en el conflicto es el funcionamiento democrático del Ayuntamiento, las contradicciones y el carácter reaccionario de la ley de Bases del Régimen Local, la actuación del equipo de gobierno que, arrogándose toda la representación municipal y utilizando a fondo el Ayuntamiento contra el trabajador sancionado y contra la movilización solidaria de vecinos y trabajadores, muestra que más que un gobierno municipal es un gobierno de poderes personales en el límite del caciquismo.

Es bueno que la población de San Fernando de Henares reflexione sobre la democracia municipal. Es bueno que entre la población se hable y discuta sobre este problema, para enfrentarse al sentido político real que tiene esta manera de gobernar.

Así tratan de desmoralizar y desanimar cualquier intento por parte de cualquier sector social de expresarse electoralmente y de utilizar la presencia en las instituciones para desarrollar su reivindicación. La idea y mensaje impreso en esta Ley es decir a los vecinos: de nada os va a servir que consigáis 2, 3, 4, 6 concejales sobre 17 porque harán lo que les dé la gana. La derecha y el PSOE tienen muy claro el objetivo de esta Ley: repartirse el pastel y seguir en la burra, durante muchos, muchos años; esto lo denuncia toda la izquierda política, incluido el PCE. ¡Pero veniros a San Fernando a ver lo que hace el PCE, a ver cómo gobierna el Ayuntamiento! □

CHILE: HISTORIA DE UNA DERROTA

I. La unidad popular

1970. Un acuerdo entre el Partido Socialista de Chile y el Partido Comunista apoyado sobre sectores importantes del movimiento obrero, lleva a la **Unidad Popular**, encabezada por Salvador Allende, a la consecución de una victoria que suponía una mínima ventaja para la izquierda chilena. El imperialismo norteamericano estaba —lógicamente— contra este nuevo régimen pero lo cierto es que Kissinger pensó entonces en todo menos en una invasión de aquel largo país. La burguesía chilena, con una larga trayectoria democrática fué capaz, a pesar de la victoria de la izquierda, de "imponer condiciones" a Allende. Los límites estaban señalados: respeto al estado de derecho, el poder ejercido por los magistrados, parlamento y gobierno respectivamente según la separación tradicional de poderes en la doctrina liberal-burguesa; es decir: no al poder popular y ninguna alteración en el seno de las fuerzas armadas. La garantía de estas condiciones era la inmutabilidad de los funcionarios del Estado.

Lo cierto es que la gestión de Allende en la presidencia de Chile procuró algunas ventajas a los trabajadores: los precios se bloquearon, los salarios, crecieron en más de un 60%, las capas más jóvenes de la población activa pudieron ser absorbidas por el mercado de trabajo, llegando a crear alrededor de 200.000 puestos de trabajo en 6 meses. La Reforma Agraria que fué una línea programática central para la Unidad Popular antes de su subida al poder, fué algo que brindó a Allende los apoyos de amplios sectores de la población. En 1971 Fidel Castro visita oficialmente Chile —permaneció allí unos dos meses— y recorre el país de un lado a otro. Castro hizo entonces un discurso "de diálogo" en el que preguntó: "¿Habéis aprendido más que vuestros explotadores?". Lamentablemente no.

II. Los límites de la Reforma

Parece ser que, a partir de este momento, la derecha pasa a la ofensiva. Desde 1972 la pequeña burguesía empieza a abandonar su apoyo a la Unidad Popular. La carestía de la vida en Chile durante aquel año fué una de las razones de aquel abandono. No la única, sin duda.

Mientras tanto, frente a la pérdida de un sector de la base social de apoyo, el gobierno de la Unidad Popular comienza a atarse con pactos, cada vez más a los militares, la derecha y el imperialismo;

El pasado 11 de septiembre se cumplió el 12 aniversario del golpe de estado que suplantó al gobierno de la Unidad Popular presidido por Salvador Allende que perdió la vida en aquellos sucesos. Tras los primeros años de dictadura, muy difíciles para una resistencia muy debilitada por la represión y el exilio, comenzó la reorganización del movimiento de masas. En mayo de 1983 aparecieron en las calles las primeras grandes movilizaciones contra el régimen. El ascenso de la protesta fué imparable durante todo aquel año. Los últimos dos años arrojan un balance de evidente reorganización del movimiento obrero y popular y de progresivo aislamiento de la dictadura pinochetista. Una jornada de protesta y movilización popular tras otra así como las numerosas huelgas que jalanan el proceso de recomposición del movimiento de masas desde los años 1978-79 parecen indicar que el enfrentamiento de la población contra el régimen militar es ya imparable. El balance de la última protesta, coincidente con el 12 aniversario del golpe que instauró la dictadura militar es de 136 detenidos. Volveremos ahora hacia el pasado y reflexionaremos muy brevemente sobre las enseñanzas de la reciente historia de Chile: la historia de un pueblo que hace algo más de un decenio pudo haber tomado el poder. La historia de algunos errores y de una importante derrota.

Leopoldo Moscoso



maniobras todas éstas, que se llevaron a cabo por un gobierno socialista que convivía temeroso con un aparato del estado intacto desde el régimen anterior. Las fuerzas golpistas incubaban en el ejército hasta el empuje definitivo de la derecha, el imperialismo y también de un amplio sector de masas.

En el mundo sindical también se experimentaban cambios: la Central Unica de Trabajadores (CUT) experimentaba en las elecciones sindicales de mayo de 1972, importantes cambios en la correlación de fuerzas en su seno. Disminuía fuertemente el peso del PCCH cuya representación dentro de la CUT pasaba de un 50% a un 30% y mientras el bloque socialista

permanecía intacto, la Democracia Cristiana experimentaba un avance del 12% al 25%. El MIR, organización fuerte, estaba muy poco implantada en el movimiento obrero tradicional. Tampoco se había planteado desde un principio en el que le sorprendió mucho la victoria de la Unidad Popular, cómo introducirse en el movimiento de masas. Su implantación quedaba reducida a sectores universitarios, a la juventud de las poblaciones y a los indios mapuches.

El 19 de octubre de 1972, la vanguardia de la reacción contra la UP organiza una prueba de fuerza a favor de la derecha. Leon Uralin, líder de la Confederación de Camioneros organiza una huelga en

este sector. La derecha salía victoriosa de esta prueba y pasaba a la ofensiva. Pero la desmoralización política, ya no de sectores de la pequeña burguesía (que sin duda se hubieran visto arrastrados hacia adelante con una dirección más decidida) sino de importantes sectores de los trabajadores vino cuando pudieron comprobar que la respuesta de Allende a las agresiones de la derecha consistió en dar pasos atrás. En lugar de adoptar medidas de presión la aberrante política de la UP consistió simplemente en amenazar a la derecha con armar al pueblo y no hacer nada más; sólo intimidarse.

Se celebran elecciones de nuevo y vuelve a ganar la UP

con un 44% de los votos. Poco después: el "tancazo". Verdadera prueba de fuerza contra la UP, no ya de la derecha, sino de las fuerzas golpistas atrincheradas en el seno de un ejército al que Allende "no pudo" tocar. Todavía en este momento y con sectores importantes de apoyo de la UP desmoralizados, la respuesta popular a aquella provocación fué implacable. Un millón de huelguistas y el "canto de un duro" para que se armara al pueblo frente a la amenaza de golpe. Pero no se hizo.

III. El derrocamiento era la vía

No sólo no se armó al pueblo sino que el reformismo se replegó. Poco tiempo después el general Pinochet era nombrado jefe del Alto Estado Mayor del Ejército. Ya había militares en el gobierno. El escaso trabajo realizado dentro del ejército iba a impedir detener la represión de la resistencia en caso de golpe militar. Se empezaban a hacer por el ejército registros de cara a descubrir arsenales de armas clandestinos. De ahí se pasó a las requisas y las detenciones. Allende ya sabía del golpe. Mientras se detenía a la gente en Valparaíso, el presidente de la UP y de Chile no pensó en armar al pueblo, no pensó en nada más que en su resistencia personal que sirvió de tanto como su política anterior. El 11 de septiembre de 1973, los grupos de poder de Chile pasaron de la hegemonía al dominio mediante la organización directa de la violencia.

Efectivamente, Kautsky es el culpable. El carácter de clase de las instituciones burguesas impide utilizar el aparato del estado burgués para el proyecto socialista. La estrategia de desgaste tiene sus límites y su expresión son las fronteras insuperables que la burguesía chilena impuso al presidente Allende. La estrategia reformista ni saca a una sociedad de la crisis y, ni mucho menos, conduce al socialismo. Cualquier intento de transgredir ciertos límites tiene, desde esta estrategia, una implacable contestación de un aparato del estado cuya naturaleza de clase no se puede borrar. La burguesía que impuso a Allende el estado de derecho no tuvo ningún problema en saltarse la legalidad por ellos mismos impuesta para desplazar a la UP del poder. Antes de llegar a este punto se podía haber adoptado otra estrategia: la toma del poder fue objetivamente posible en Chile. El derrocamiento y no el desgaste, era la vía correcta. La clase obrera chilena había sido derrotada.

LA MUJER EN NICARAGUA

¿Activismo... sin emancipación?

La revolución nicaragüense se produjo en el marco de un auge creciente del llamado "Nuevo Feminismo" latinoamericano. Algunos dirigentes sandinistas creyeron positivo abrir un espacio propio a este nuevo movimiento social.

La práctica de estos seis años, surcada por aciertos y contradicciones, abre nuevamente el debate sobre un viejo dilema: las posibilidades que un proceso revolucionario brinda a la lucha por la emancipación de la mujer, y también las limitaciones ideológicas y materiales que ésta sigue enfrentando.

Maxime Molineux (Colaboradora del INIES de Nicaragua)

Mujeres en Nicaragua

Los primeros números de la revista de AMNLAE (Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza) incluían entre otras cosas, algunos de los debates sobre la mujer existentes entonces en las naciones occidentales. El Frente Sandinista nunca denunció el feminismo como una desviación contrarrevolucionaria, como ha sucedido en otros procesos revolucionarios.

De AMPRONAC a AMNLAE

En septiembre de 1979, dos meses después del triunfo, la antigua organización de mujeres AMPRONAC, se convierte en AMNLAE y se empieza a desarrollar un programa mucho más claro respecto a los problemas de la mujer. Consignas de apoyo a esta lucha son por ejemplo "Sin la emancipación de la mujer no hay revolución. Sin revolución, no hay emancipación de la mujer".

Transcurridos los dos primeros años de revolución, la política del Frente Sandinista pareciera diluirse en este sentido. Simultáneamente, a partir de 1982, AMNLAE asume la "defensa de la revolución" como prioridad.

En aquel momento, en el primer discurso importante efectuado sobre el Estatuto de la mujer después del triunfo, el Ministro del Interior, Comandante Tomás Borge, reconoció que "aunque se habían logrado ciertos avances, tenemos todos honrosamente que admitir que no hemos enfrentado con el mismo coraje y decisión la lucha por la emancipación de la mujer, que el que tuvimos en la lucha de liberación(...). Desde el punto de vista de su actividad cotidiana la mujer sigue en lo fundamental, en las mismas condiciones del pasado".

La política sandinista hacia la mujer

El programa histórico del Frente Sandinista ya plantea

ba en 1969 que "la revolución popular sandinista abolirá la odiosa discriminación que la mujer ha padecido con respecto al hombre" y "establecerá la igualdad económica, política y cultural entre la mujer y el hombre".

Este compromiso se plasmó una década después en el Estatuto Fundamental de todos los Nicaragüenses, "sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo". Fue todavía más lejos al agregar que "el Estado deberá superar por todos los medios a su alcance los obstáculos que impiden esta igualdad". Esto proveyó el contexto jurídico de las futuras medidas legislativas y políticas.

En este marco AMNLAE fija, en su programa oficial, sus principales objetivos: la defensa de la revolución; la promoción de la superación política e ideológica de la mujer en función de su mayor participación social, política y económica en la revolución; el combate contra las desigualdades legales e institucionales; la promoción de la superación cultural y técnica de la mujer así como su acceso a áreas de empleo tradicionalmente reservadas a los hombres; la promoción del respecto hacia el trabajo doméstico y la creación de centros de desarrollo infantil para las mujeres trabajadoras y la promoción y estrechamiento de lazos de solidaridad internacional.

Algunos beneficios sociales conquistados

En la práctica, los mayores beneficios para la mujer se evidenciaron en programas de bienestar, ciertas áreas de reformas legales, y también en un papel creciente beligerante en la movilización política.

Las mujeres se beneficiaron, generalmente más que los hombres, de políticas generales en las áreas de salud, educación, programas sociales, vivienda y reforma agraria, en tanto las mujeres representan el 60% de la población nicaragüense más pobre. Esto es



aún más evidente en Managua, donde dentro de la categoría de ingresos más bajos, existen 354 mujeres por cada 100 hombres. Muchas de ellas son cabeza de familia.

Por otra parte, las nuevas leyes referentes a la familia —la Ley de Alimentos y la Ley sobre las Relaciones entre Madre, Padre e Hijos— persiguen el fortalecimiento de esta institución, promoviendo una mayor cohesión familiar y superando las desigualdades entre los sexos. El alto porcentaje de desertión masculina, la migración, la poligamia seriada, tuvieron como consecuencia que muchas mujeres quedaran como único sostén de sus hijos: el 34% de los hogares nicaragüenses tenían a una mujer como cabeza de familia, de las cuales un 60% pertenecientes a Managua.

Según la nueva Ley de Alimentos todos los nuevos miembros adultos de una familia de hasta tres generaciones son legalmente responsables del mantenimiento de la familia, lo que también implica la participación en las tareas del hogar.

Además de estos cambios se mejoran las disposiciones sobre salud y seguridad para las mujeres trabajadoras, en tanto la nueva legislación prevé el derecho de las trabajadoras rurales a sus propios salarios a fin de corregir una situación en la que se pagaba convencionalmente un salario familiar tan sólo al hombre.

En lo que se refiere a la movilización política de las mujeres para 1984, había más mujeres movilizadas que en cualquier otro momento. AMNLAE afirma contar con 85 mil miembros, en tanto las mujeres representan el 22 por ciento de la membresía del Frente Sandinista y más de un tercio, o sea el 37%, de la Dirección. La participación de la mujer en otras organizaciones de masas y en órganos de defensa popular, también se amplió con la agudización de la crisis. Alrededor de la mitad de los miembros de los Comités de Defensa Sandinista (CDS) son mujeres. Tienen un peso similar en las Milicias.

Persiste la desigualdad

Los avances, sin embargo, han sido desiguales. Las oportunidades de empleo estable

en el sector formal de la economía se han ampliado pero siguen restringidas en número y cargos. La socialización de la atención para los niños y del trabajo doméstico sólo ha afectado a una minoría de mujeres: a mediados de 1984, 43 centros de desarrollo infantil atendían a unos 4 mil niños, y no se contemplaba mayor expansión a causa de las dificultades económicas. La Ley de alimentos que constituyó el embrión de Ley sobre la familia —votada a fines de 1982— tendía a establecer una familia más democrática, igualitaria y mutuamente responsable. No se implementó ampliamente y las discusiones públicas sobre los temas que suponía, cesaron en 1983.

Todas estas políticas dan alguna respuesta de tipo "práctico" a los problemas de las mujeres, pero ello no siempre implica una respuesta a sus intereses "estratégicos" como mujeres, es decir, no siempre tienden a una progresiva abolición de la desigualdad, discriminación y opresión de su situación.

¿Cuáles son las causas de estas limitaciones? Además de la explicación obvia de la falta de tiempo, pueden darse distintos tipos de argumentaciones.

La primera se refiere a las limitaciones prácticas que restringen la capacidad estatal de transformación social, derivadas de la escasez material, provocada tanto por el subdesarrollo de la economía como por los daños ocasionados por la guerra.

Entre otros programas parcialmente restringidos se encuentran aquellos que afectan directamente la situación de la mujer tales como la reducción en la construcción de Centros de Desarrollo Infantil y de su dotación de personal, o la menor contratación de empleo femenino.

En un segundo orden, jugó el compromiso constitucional del Frente Sandinista con los principios del pluralismo político y la economía mixta que dejaron un espacio, aunque restringido, a la actuación de las fuerzas de oposición, incluida la Iglesia. Esto ha tenido un costo evidente en el tema de la mujer.

El mantenimiento de un sector privado significativo y la concesión de un margen de autonomía a este sector, permitió que ciertos patrones,

especialmente en las pequeñas empresas no sindicalizadas evadieran la legislación destinada a proteger y mejorar las condiciones laborales de las mujeres, así como a mantener políticas de empleo discriminatorias. También sucedía esto en el sector Servicios.

La presión de la jerarquía católica

Pero una posición mucho más inmanejable de resistencia a las políticas sandinistas fue la mantenida por la jerarquía de la Iglesia Católica. Su presencia institucional extensiva, sus formas de organización, su acceso a medios de comunicación, la convirtieron en oponente formidable.

El clero conservador se opuso activamente a las reformas de la educación y de la familia, insistió sobre la prohibición de trabajar el fin de semana —lo que dificultó la realización de trabajo voluntario— se opuso al servicio militar de las mujeres, y abogó con gran entusiasmo por la vida familiar tradicional con la división del trabajo que la caracteriza.

La Iglesia Católica se opuso también, a la reforma del divorcio y presionó a favor de la encíclica Papal que reseña como un pecado el uso de métodos anticonceptivos "no naturales", se opuso a la legalización del aborto, forzando así a miles de mujeres a seguir recurriendo a prácticamente semiclandestinos.

Otro factor que incide en el éxito o fracaso de la política hacia la mujer, es el grado de oposición o resistencia que encuentran entre la población, y en especial entre las mujeres.

A raíz de esta comprobación, aunque relativa en la medida en que tampoco existe una investigación extensiva al respecto sobre las actitudes de las mujeres, AMNLAE fue abandonando los temas feministas en función de intentar no perder la base de influencia.

Finalmente, la explicación de los avances en este tema, deben buscarse ubicando la importancia dada a la problemática de la mujer en relación con otras prioridades de la política sandinista.

A este respecto, podría concluirse que el Frente Sandinista ha sido capaz de llevar a cabo, con gran apoyo popular y sin levantar significativa resistencia, aquellas partes del programa sobre la mujer que coincidían con metas generales, más globales, tales como el bienestar social, el desarrollo, la igualdad social o la movilización política en defensa de la revolución. En cambio, los avances en la superación de la problemática específica de la mujer han sido mucho más relativos y han tenido tendencia a relegarse cada vez más. □

(Reproducido de "Pensamiento Propio" n°24 jun-jul 85)

IV. Los 12 años de dictadura y la descomposición de la base social del régimen

Efectivamente hubo un período en el que la clase obrera chilena estuvo subjetivamente preparada para la insurrección, pero no es menos cierto que el desaliento de la población otorgó al régimen pinochetista durante sus primeros años un apoyo de masas importante. La dictadura estaba consolidada en 1976. En el terreno económico, el FMI volvió a gobernar Chile. Los "expertos" economistas neoliberales de la Escuela de Chigaco aplicaron en el país una política monetarista cuyos pilares fundamentales fueron la reducción de las tarifas arancelarias y el establecimiento de una relación falsa entre el peso y el dólar. Por otro lado, el ejercicio de la represión fue la manera de garantizar la estabilidad en los primeros años de la dictadura. Las condiciones de movimiento de la Resistencia, aislada, eran difícilísimas. Los dirigentes de los partidos eran encarcelados o liquidados físicamente con lo que el germen de la oposición popular quedó debilitado durante años. A pesar de la estabilidad alcanzada por el régimen la crisis económica mundial afectó a Chile y empobreció a su burguesía. Esta situación se iría agravando hasta desembocar en los orígenes del resquebrajamiento de la base social del régimen. La situación fue siendo cada vez más desastrosa. El paro llega a afectar al 36% de los 3 millones de personas integrantes de la población activa chilena. El poder de compra de los salarios comienza a descender vertiginosamente. Desciende la producción industrial, la superficie cultivada y el PNB. La deuda externa crece de 4.000 millones de dólares en 1973 a 20.000 una década más tarde. En 1983 Pinochet consigue un nuevo crédito internacional poniendo como garantía todas las riquezas, y propiedades del país, excepto cuarteles y embajadas. La deuda externa por habitante alcanza los 2.000 dólares. Cada uno de los 11,1 millones de chilenos debe al FMI, unas 400.000 pesetas. La población parada, permanece en el paro sin ningún tipo de subsidio en la mayoría de los casos. Los que tienen trabajo cobran un salario que oscila en los empleados entre las 12.000 y las 15.000 pesetas. En 1983 el porcentaje de parados que llevaban dos años sin trabajar era del 50%. Las ollas populares comienzan a organizarse como forma de distribución social de la riqueza en las zonas más azotadas por la miseria pero también como verdaderos organismos de forma de decisiones políticas por el pueblo, asambleas de huelga, movilizaciones, etc....

A comienzos de 1983 la base social del régimen pinochetista está muy descompuesta. En



primer lugar por la propia dinámica de la economía. La situación de crisis afecta ya a los trabajadores, por supuesto, a la pequeña burguesía y a la burguesía industrial desprotegida con unas tarifas arancelarias tan bajas (Chile está lleno de productos importados que van hundiendo la industria nacional). En segundo lugar, por la recuperación del movimiento obrero y popular: nuevas generaciones de combatientes de la Resistencia han suplantado a una generación anterior profundamente debilitada por el exilio, la represión, la muerte. Además de esto la protesta se ha extendido a sectores tradicionalmente neutrales, indecisos o incluso reaccionarios. Aunque sólo sea por "oposición económica" —que no política— la patronal apoya las huelgas en defensa de la democracia. El 11 de mayo de 1983 gran huelga contra las medidas económicas del gobierno. Las jornadas de protesta se irían sucediendo una tras otra. Pinochet empieza a estar aislado dentro de su país y fuera también. Dentro de Chile, la mediana y gran burguesía pretenden alcanzar un acuerdo con el aparato militar que ya se descubre como inservible para la consecución de sus intereses económicos. Un acuerdo que devuelva a Chile la calma y el orden económico para poder seguir negociando. Otro sector, frente a la Alianza Democrática, aglutinado en torno al MDP se opone a la negociación con el régimen militar y apuesta por una ruptura con él. Fuera del país, el imperialismo propicia reformas políticas, para volver a estabilizar el país y no perder

el control sobre las masas. Sería peligroso para el Capitolio que se abriera un "segundo frente" similar a Centroamérica en el cono Sur de América Latina. Por otro lado, el imperialismo presiona a Pinochet para que cumpla los dictados del FMI. Presionado por todos lados, Pinochet establece un camino institucional hacia la democracia que culmina en 1989. En un primer momento Onofre Jarpa sería el interlocutor del régimen con la formación política que aglutina a la burguesía. En este momento para el régimen es imposible pensar en recomponer su base social de apoyo y para la burguesía es impensable —dado que su presión hacia el régimen se ha apoyado en las movilizaciones populares— dar una alternativa diferente a la democracia burguesa. Ya no cabía pensar en sustituir sólo a Pinochet por otro militar "más presentable". El terreno de la batalla estaba marcado. Un terreno apto para todo tipo de maniobras reformistas. Desde el año 83, la batalla está siendo dura. Los ofrecimientos de acuerdos de todo tipo para la transición pacífica puestos en la mesa por los "discípulos de Suárez" en la AD reciben la contestación sistemática de un movimiento popular cada vez más recompuesto y con una clara expresión política en contra de negociar con Pinochet. Por otro lado, la política de acercamiento de Pinochet a la oposición burguesa varía en función de la tensión política del país. Declaración de estado de sitio, asesinato de militantes del movimiento popular en las protestas callejeras o juicios militares contra civiles son los tipos de

respuesta que el general dá para que las masas no "alteren el orden público" y como prueba de fuerza —en el más puro y simple ejercicio de la represión— frente a una oposición burguesa que pudiera pensar en aislarle del proceso institucional de transición a la democracia.

La reorganización periódica de la represión del régimen y la base real —para que negarlo— de apoyo a la vía del pacto, son los dos obstáculos fundamentales que tiene el movimiento obrero y popular para "lavar" la derrota sufrida hace 12 años.

V. El último acuerdo histórico: estaban todos menos los demócratas

Con el importante respaldo de la Iglesia católica un abanico de fuerzas políticas, desde la derecha no comprometida con Pinochet hasta la izquierda no comunista, parecen haber logrado un nuevo acuerdo político para la transición. El Acuerdo Nacional para la Transición plena a la Democracia se ha conseguido aislando del proceso a quien había que aislar: a la izquierda comunista y a la expresión política del movimiento popular. El MDP (Partido Comunista, Movimiento de Izquierda Revolucionario y Bloque Socialista de Clodomiro Almeyda) no fue invitado a las conversaciones. Gabriel Valdés, presidente de la funesta Democracia Cristiana (hermana gemela de la Salvadoreña) y de la AD declaraba hace unos días al periódico EL PAIS: "este es un acto

histórico, el más importante políticamente en los últimos 12 años, que ha puesto de acuerdo a todos los partidos democráticos en fijar criterios precisos sobre las normas constitucionales que deben regir la democracia que nosotros ansiamos, los planteamientos económicos y sociales para el duro período en que tengamos que recibir la herencia de la dictadura, y las medidas inmediatas para iniciar el proceso de transición, con el desmantelamiento del régimen de excepción y represión". Está claro que para Valdés el Acuerdo Nacional recién firmado es más importante que las sucesivas huelgas y protestas populares o que las decenas de condenados a muerte por el régimen pinochetista.

Por otro lado, el Acuerdo Nacional no establece un plazo para el retorno a la democracia. ¿Cuál será ese plazo? ¿El que marque Pinochet? La última jornada de protesta coincidente con el 12 aniversario del 11 de septiembre del 73 dejó un saldo de 136 detenidos —tal y como decíamos al principio de este artículo—. Todos los datos de la calle indican —no cabe duda— que no todo Chile está dispuesto a negociar con los delincuentes profesionales y los asesinos del Pueblo, tantas veces pisoteado por unos y por otros, en "este acuerdo histórico" han estado todos menos los demócratas, porque la verdadera democracia la conquistará el pueblo en una dura batalla cuyo fin no podemos prever. Aunque —y de eso sí estamos seguros— la alternativa popular no negociará la sangre derramada durante tantos años. □

COMBATE SINDICAL

UNA LUCHA EJEMPLAR EN LA SANIDAD DE SEVILLA:

NOVALIM contra todos

Durante los meses de verano, la lucha de NOVALIM ha ido apareciendo en la información laboral de la prensa, normalmente deformada, o como una lucha marginal en el mejor de los casos. En realidad se trata de una de las movilizaciones que deben servir de ejemplo al sindicalismo de resistencia que queremos. Por eso, COMBATE-ZUTIK! le dedica ahora este informe, cuando faltan datos aún para valorar el resultado final: haremos esto en un próximo número.

Las condiciones de la lucha de NOVALIM han sido difícilísimas: una lucha de una contrata, en un sector débil (limpiezas), una lucha protagonizada por mujeres, y sobre todo, una lucha con enemigos poderosos y en Andalucía, donde como es sabido existe la dirección confederal de CCOO más derechista y más

Corresponsal

incompetente, encabezada por ese nefasto personaje que se llama Antonio Herrera, secretario general de la COAN.

Los enemigos de las trabajadoras de NOVALIM han sido todas las "fuerzas vivas": la Junta de Andalucía, la administración sanitaria, la prensa, la policía, la patronal, representada en este caso por el cacique de NOVALIM, Gerardo Martínez Retamero, presidente del Betis, uno de esos típicos empresarios-vampiros, cuyos beneficios vienen no sólo de la explotación de los trabajadores, sino de la pura y simple estafa.

Los amigos de NOVALIM han sido los de siempre: la izquierda sindical y, en particular, nuestro partido.

No se ha conseguido la victoria. Pero queda esta experiencia que puede colocarse sin exagerar junto a las mejores luchas combativas que hemos vivido en los últimos años.

El Himno de Novalim

«Empezamos con la RASSSA
Acabamos con SERLIMA
Que es el animal más fiero
Que devora al obrero
Que devora, que devora al obrero
Viva la Revolución
La revolución social
Arriba trabajadores
Luchemos por la igualdad
¡Por la igualdad!
Vivan, vivan las limpiadoras
Viva, viva la unidad».

Dos meses de lucha

•"Novalim", concesionaria del servicio de limpieza de la Ciudad Sanitaria "Virgen del Rocío" en Sevilla, desde 1981; 560 trabajadores(as), que soportan una congelación salarial desde hace 3 años y el incumplimiento sistemático de su convenio; el propietario de la empresa es Gerardo Martínez Retamero, presidente del Betis: sus deudas a los trabajadores, la SS, Hacienda, etc., son de unos 700 millones de pesetas.

•La reivindicación central de los(as) trabajadores(as) ha sido la integración en la plantilla de la RASSSA (antes INSALUD). Inicialmente se les dan buenas palabras: incluso la RASSSA llega a afirmar que supondría globalmente un ahorro de dinero para la administración. Pero el 19 de julio pasado, el boletín de la Junta de Andalucía saca a subasta la contrata.

•La huelga fue aprobada en asamblea (237 a favor, 1 en contra, 5 abstenciones) y se desarrolló del 5 al 11 de julio, y con carácter indefinido desde el 16. 9 trabajadores hacen huelga de hambre de solida-

dad del 20 al 27 de agosto.

•La amenaza es de 200 despidos, con 300.000 pts. de indemnización y 2 años de paro.

•En las largas semanas de movilización, se han utilizado todos los métodos de lucha: asambleas diarias; pintadas por todo Sevilla ("las contratas son unas ratas", "INSALUD crea más paro en Andalucía"; encierros en la Consejería de Salud y Consumo de la Junta, cuyo responsable Pablo Recio ha sido el más destacado "rompe-huelgas"; concentración en el acto de homenaje oficial a Blas de Infante y abucheo a "Pepote" Rodríguez de la Borbolla; intento de entrar en el Congreso de la "IUSY" (Internacional de la Juventud Socialista) impedido a medias por la policía y el servicio de orden de estos "jsocialistas"; múltiples manifestaciones en particular el 6 de septiembre con asistencia de Camacho y participación de unas 1.500 personas, convocada por la Unión Provincial de CCOO que, junto al comité de empresa de NOVALIM, ha llevado la lucha.

•El 2 de agosto, la contrata es adjudicada al holding SERLIMA, ligada al parecer a "psocialistas" de Catalunya. La lucha se radicaliza. Se implantan servicios mínimos abusivos, como siempre, aunque atendidos por los trabajadores. Se inicia una feroz campaña de prensa que acusa a los trabajadores de los "riesgos de infección" que produciría la inevitable suciedad que crecía en el hospital. Finalmente, Pablo Recio denuncia los servicios mínimos y se organiza el esquirolaje de "voluntarios", primero de la Cruz Roja y después de la propia "SERLIMA".

•Se busca la división de la plantilla de NOVALIM, ofreciendo, por intermedio de UGT, a algunas de ellas la integración como fijas en SERLIMA con 58.000 pts., de salario, para empezar a trabajar inmediatamente.

•En estos momentos se están realizando los despidos, presentados como "bajas voluntarias". SERLIMA trabaja con normalidad. □

Los servicios mínimos o la negación del derecho de huelga

El comité de empresa sabía que este asunto era delicado: hace cuatro años, en otra huelga, no los respetaron y fueron desalojados brutalmente; ahora se van dando instrucciones en cada asamblea. Los trabajadores solicitaron como "mínimos" 150; se les imponen 307. Se limpiaban los quirófanos, urgencias, parturios (estos voluntariamente, porque no se les incluyó en el decreto) y las habitaciones de enfermos. No se limpiaban: pasillos, escaleras, salas de espera, recinto exterior, etc. Ahí la suciedad va creciendo día a día.

La derecha aprovechó el momento: el Colegio Médico "eludió responsabilidades" de los facultativos en caso de focos infecciosos; los diarios (muy principalmente ABC) en portada denunciaba los "riesgos hospitalarios". En nombre de la Junta, Pablo Recio, decidió romper la huelga.

Se presiona a los trabajadores para que limpien todas las dependencias; se envía requisitoria a NOVALIM para que cumplan mínimos equivalentes a la limpieza total. Finalmente, se rescinde el contrato y se envía a la policía al desalojo del recinto. Los "mínimos" son expulsados de los hospitales y entran 20 esquirolas de la Cruz Roja. Hay que decir que la policía no se atrevió a desalojar a los trabajadores encerrados la 1ª noche siguiente a la rescisión del contrato: los más de cuatrocientos trabajadores y familiares allí presentes tenían los ánimos "finos"; la asamblea ante el despliegue policial decidió no moverse un centímetro, permaneciendo en los lugares habituales de cespel y gradas donde, desde hacía más de veinte días, se pasaba la noche.

La empresa SERLIMA, actual adjudicataria, envió un retén de 50 esquirolas, que

entran protegidos por la policía, comen y duermen dentro del recinto: se rumorea que son parados procedentes del País Valenciá.

El "escrupuloso respeto" del PSOE hacia los derechos laborales y la "legalidad vigente"

Después de mantener durante meses la política del avestruz, la Junta pretendió interpretar el papel de Poncio Pilatos. Decía el Consejero de Salud y Consumo, que el Insalud era un "cliente" de las contratas de limpieza, que el conflicto le era "ajeno" y no sabía por qué se le pretendía involucrar, ya que "si se producían 150 a 200 despidos, el asunto lo deben tratar limpiadoras y contratista". También dijo que "este asunto es herencia de 'otras administraciones' y que era lógico debido a las condiciones económicas del convenio de limpieza que hacían inabordable su coste. Enfin, él sólo actuó "para priorizar entre la salud de todos los Andaluces, en riesgo por la suciedad acumulada y los derechos de casi 600 limpiadoras que no respetan los mínimos, cortan el tráfico, realizan huelgas de hambre, pintan las paredes y cobran tanto o más que un médico".

Cada día, pese a la consabida política claudicante y antiobrera del PSOE, nos llevamos sorpresas y ascendemos una cota más en cuanto a su cinismo, arrogancia y represión se refiere. La integración les asustaba porque podría ser el precedente en otras provincias de Andalucía y de todo el Estado para reivindicar lo mismo. El PSOE calibró muy a la ligera que las limpiadoras de NOVALIM no se doblegarían con facilidad, y han dado una lección del sindicalismo de resistencia. □

EMPRESA Y DOMICILIO		CIUDAD SANITARIA VIRGEN DEL ROCIO - SEVILLA -		Nº PATRONAL	Nº MATRICULA
				41/ 33607	509
APellidos y nombre		CATEGORIA	FECHA INGRESO	Nº ASEGURADO A S S	
NOVALIM SA LARM, SERLIMA		Pinche (Limpiadora)	1.985	R.A.S.S.S.A.	
CONCEPTO		UNIDAD %	PRECIO UNITARIO	ABONOS	DESCUENTOS
NO AL TERRORISMO INSTITUCIONAL DEL P. S. D. E.					
POR LA DEFENSA DEL PUESTO DE TRABAJO Y LOS DERECHOS SINDICALES.					
CONTRA EL PARO Y LA PIRATERIA DE LOS CONTRATISTAS DE LA LIMPIEZA.					
SOLIDARIDAD CON LAS LIMPIADORAS DE VIRGEN DEL ROCIO					
CENTRO		LIGUIDACION	EPICRASE	TARIFA	BASE DE TARIFA
		DEL			
FIRMA CAJERO		CONCEPTOS RETRIBUTIVOS		RECIBI:	
SELLO DE LA EMPRESA		Base - Antigüedad - Plus de Transportes - Ayuda Familiar - Plus de Asistencia o vos - Horas Extras - Porcentaje - Pagas de Beneficios - Complemento Empresas - Gratificación de Navidad - Gratificación de Julio - Desgaste de Herramientas - Prestaciones por Enfermedad - Prestaciones por Accidente			

La Solución es la Integración



liga comunista revolucionaria

23 DE OCTUBRE:

CONSEJO CONFEDERAL DE CCOO



Jornada en solidaridad con latinoamérica, azotada por la deuda externa

Uno de los compromisos concretos más importantes adoptados en este Consejo Confederal ha sido precisamente el de incrementar la solidaridad internacionalista con los pueblos que luchan por su liberación y más concretamente realizar acciones el día 23 de octubre en solidaridad con los pueblos latinoamericanos azotados por la Deuda externa. Nuestro criterio es el de que se hagan manifestaciones en el máximo de ciudades y pueblos posibles acompañados de una intensa campaña en la calle y los centros de trabajo.

Reproducimos a continuación extractos del Acta de La Habana en el que se explican los contenidos y motivos de esta convocatoria:

ACTA DE LA HABANA (extractos)

En La Habana, del 15 al 18 de julio de 1985, se reunió la Conferencia Sindical de los Trabajadores de América Latina y el Caribe sobre la Deuda Externa.

Participaron en la Conferencia 330 sindicalistas, pertenecientes a 197 organizaciones, y procedentes de 29 países y constituyó el evento más amplio, unitario y representativo realizado por el movimiento sindical organizado de América Latina y el Caribe.

Numerosos participantes hicieron énfasis en la trágica situación económica y social que padecen los pueblos latinoamericanos sumidos en la crisis, principalmente los trabajadores de la ciudad y el campo, víctimas del desempleo, el deterioro de los niveles de vida y el aumento alarmante de la pobreza extrema, e hicieron referencia a los cambios estructurales internos que requiere la solución definitiva de estos problemas.

Se destacó al respecto que en América Latina y el Caribe existen unos 56 millones de desempleados totales y unos 110 millones de desempleados, si se considera el subempleo. No menos del 40% de la población latinoamericana vive en los límites inferiores de la pobreza crítica y un 30% por debajo de esos límites.

La totalidad de los participantes puso de relieve que la deuda externa es la manifestación más dramática de la actual crisis, así como el más importante factor que no sólo tiende a profundizarla, sino que impide la recuperación económica, bloquea toda posibilidad de desarrollo, somete a nuestros pueblos y en especial a los trabajadores a insostenibles políticas restrictivas de sus niveles de vida y compromete nuestra soberanía al profundizar la dependencia respecto a los bancos acreedores, al FMI y a los gobiernos de los países industrializados que controlan las decisiones en este organismo.

Las proposiciones acordadas, que recogen el sentir de la inmensa mayoría de los participantes, son las siguientes:

— Proponer al movimiento sindical organizado que exija de los gobiernos de sus respectivos países la adopción de medidas conducentes a la anulación, moratoria, suspensión inmediata de pagos, o postergación por un determinado número de años del pago de la deuda externa y los intereses, y la solidaridad con los demás países de América Latina y el Caribe que asuman esta misma posición.

— Sugerir a las organizaciones obreras que, de acuerdo con las condiciones concretas de cada país, promuevan la incorporación de los gobiernos a un frente unido de países deudores de América Latina y el Caribe.

— Trasladar a las organizaciones sindicales y campesinas la sugerencia de que, en la lucha por la solución del problema de la deuda se vinculen estrechamente a otras fuerzas sociales y sus correspondientes organizaciones.

— Efectuar la más amplia divulgación de los resultados de la Conferencia.

— Apoyar las próximas acciones unitarias del movimiento sindical latinoamericano y caribeño, que podrían incluir la creación de los mecanismos de coordinación propuestos con fuerza en esta conferencia por la mayoría de los participantes, a fin de impulsar hacia objetivos superiores la lucha de los trabajadores organizados del continente frente a los problemas que plantea la deuda externa.

— Convocar a todos los trabajadores y a todas las organizaciones sindicales de América Latina y el Caribe a la realización, el próximo 23 de octubre, de un día de acción continental contra la deuda externa y sus catastróficos efectos sobre la vida económica y social de nuestros países.

— Brindar apoyo a todas las convocatorias regionales o subregionales sobre el tema de la deuda externa.

— Los participantes en la Conferencia, inspirados en el legado histórico inscrito en el libro sagrado de los mayas: «Que todos se levante, que se llame a todos, que no haya ni uno ni dos entre nosotros que se quede atrás» reiteran, finalmente, el compromiso de luchar:

Primero: ¡Por la anulación, moratoria, suspensión inmediata de pagos o postergación indefinida de la deuda externa incluidos los intereses!

Segundo: ¡Por el establecimiento del nuevo orden económico internacional!

Tercero: ¡Por la unidad latinoamericana y caribeña! ¡Por el avance hacia formas de integración económicas de América Latina y el Caribe, al servicio del desarrollo y la independencia de nuestros países!

Y para dejar constancia de la presente, suscriben todos los participantes a los 18 días del mes de julio de 1985.

El Consejo Confederal de CCOO, reunido los días 17 y 18 de noviembre, ha discutido sobre las actividades a desarrollar en el próximo trimestre y el enfoque de cara a la negociación colectiva.

Los compromisos más importantes salidos de este Consejo son los siguientes:

— Organizar una jornada de solidaridad con Latinoamérica para el 23 de octubre e incrementar la solidaridad con Nicaragua.

— Participar en las acciones del movimiento pacifista (como la del 10 de noviembre) para exigir el Referéndum y la salida de la OTAN, así como promover una campaña anti-OTAN en las fábricas, con especial énfasis en la denuncia de los gastos militares, que comprende una recogida de firmas de delegados y la celebración masiva de Referéndums.

— Organizar una protesta de los trabajadores de la función pública contra el tope salarial (unos datos apuntan a que será del 5,5%, otros del 6,5%) antes de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. Esta protesta incluye la convocatoria de una huelga. Los trabajadores afectados son alrededor de un millón y medio.

— Denunciar la Ley General de la Salud, que supone la segunda fase de la contrarreforma de la Seguridad Social y pretende establecer una sanidad peor y más cara para los trabajadores, además de favorecer al sector privado. Apoyar la constitución de las Plataformas y Mesas en defensa de la salud pública y

preparar la convocatoria de manifestaciones.

Negociación colectiva

La reivindicación salarial que se ha decidido pedir en los convenios este año es del 11% es decir, tres puntos por encima de la previsión última hecha por el Gobierno sobre cuál será el incremento del IPC durante al año 1986. Hubo un acuerdo muy amplio sobre la necesidad de reivindicar ese 11% (salvo algunos que lo consideraban poco realista y excesivamente radical). El principal problema aparecido en los debates es respecto a la interpretación sobre qué cálculo se ha hecho para llegar a esa cifra, ya que determinada por lo que se espera que incida en el IPC la entrada en vigor del IVA, supone un cambio de actitud bastante sustancial con lo que la dirección Confederal de CCOO ha venido haciendo en esta materia durante estos últimos años, lo que la mayoría de esta dirección no ha querido reconocer. En todo caso, lo importante a retener es que esa exigencia es completamente justa y defendible: porque, simplemente para mantener el poder adquisitivo es necesario tener en cuenta el impacto que va a tener el IVA, lo que además revaloriza la defensa de la revisión y porque es correcto también aspirar a mejorar el poder adquisitivo, especialmente de los sectores que más se han ido empobreciendo. Lo importante y lo difícil es cómo se defiende ese 11%. Y las orientaciones emanadas del Consejo no son

muy útiles para ello, pues van en el sentido de que a la hora de la verdad se pase del 11% olímpicamente y no dan ninguna orientación de lucha coordinada de los distintos convenios, con huelgas convocadas simultáneamente que es lo que hay que conseguir realizar con éxito durante esta negociación colectiva.

Canon por la puerta falsa

Un aspecto muy nefasto de los aprobados en el Consejo es sobre el Canon de convenio. Bajo la excusa de que la Ley lo permite (pero no obliga a ningún sindicato a cobrarlo) se acordó una postura que aunque afirme mantener "la posición de principio de no al canon" posteriormente establece una serie de criterios para cobrarlo, abriendo así una puerta falsa a que CCOO lo intente cobrar en no pocos convenios, lo que en unos años significara dejar las puertas abiertas de par en par a una práctica mercantilista —ajena a nuestras tradiciones sindicales— de enfocar el derecho de los sindicatos a representar a los trabajadores en los convenios, convirtiéndose en meros tratantes que luego pasan la minuta. Un sindicato debe sacar el dinero del apoyo de los trabajadores, desde luego, pero no de esa forma que más bien fomenta el burocratismo. No por casualidad han sido los sectores más burocratizados del movimiento sindical los que han tomado la iniciativa al respecto y no por casualidad el Gobierno del PSOE se ha apresurado a legislarlo. □



SITUACION Y PERSPECTIVAS ECONOMICAS

Los que creen que la situación económica está cambiando se apoyan en tres puntos para justificar su satisfacción. Una satisfacción cargada de intencionalidad, puesto que la mejora la achacan a la política de rigor y austeridad aplicada en el pasado, cuyos frutos, dicen, no deben malograrse ahora suavizando la política. La inflación, afirman, parece estar dominada en límites aceptables. El paro, como segundo punto, se está reduciendo. La inversión, en fin, como variable fundamental para generar empleo, muestra signos de recuperación. Pero, sin perjuicio de que algunas cifras muestren una evolución más favorable (o menos negativa) de los precios, el paro o la inversión, resulta precipitado ver en ellas una modificación sustantiva de la trayectoria de la economía: se trata de cifras parciales y discutibles que en modo alguno definen una mejoría consolidada y que son insuficientes para basar en ellas una interpretación favorable de la situación económica.

Los precios, el IPC concretamente, han experimentado subidas mínimas en los últimos meses, pero el fantasma de la inflación no ha desaparecido y su recrudescimiento es una secuela inevitable de la implantación del IVA. El paro registrado ha disminuido en los meses pasados, pero la "depuración" de estadísticas no es ajena a ello, la estacionalidad del verano tampoco, y, en todo caso, si el paro cae no se tiene constancia de que el empleo aumente. La inversión puede que evolucione más favorablemente que en años anteriores, pero de ser así no se trata de un cambio que signifique una recuperación, sino más bien una variación poco relevante de una magnitud que oscila con bastante intensidad y amplitud. Las condiciones para un relanzamiento de la acumulación de capital no están dadas y, por lo que respecta a sus repercusiones en el empleo, las inversiones actuales destruyen más puestos de trabajo que los que crean.

Los precios

En los meses que van de enero a julio del presente año, el crecimiento del IPC ha sido del 5,1%, lo que significa que si en los que evolucionan de forma similar, en diciembre la inflación será del 9%. Por lo tanto, en diciembre, el gobierno no habrá conseguido que se cumpla su objetivo de un IPC del 7%, como quería Boyer, pero su sucesor, Solchaga, podrá presentar al menos una inflación que no será más alta que la de 1984.

Esto último es particularmente importante para el gobierno. Como consecuencia de la entrada en la CEE, el 1 de enero entra en vigor el Impuesto sobre el Valor Añadido. Este impuesto, que sustituye a otros como el ITE, afecta a todas las transacciones y representa una carga fiscal mayor, por lo que indudablemente tendrá una repercusión inflacionista. Los expertos calculan que solamente el primer año, su impacto sobre el IPC no será menor de 4 ó 5 puntos, por lo que, aunque la inflación continúe moderándose un poco, durante

El empeoramiento ha mejorado

Después de haber lanzado las campanas al vuelo muchas veces, y equivocarse siempre, en cada ocasión en que algunos datos económicos mostraban alguna mejoría, ahora el gobierno se muestra precavido ante ciertos datos halagüeños para su política. No obstante, los escasos resultados positivos tratan de presentarse como éxitos y como hechos muy significativos, anunciadores (¿quizás?) de una próxima primavera económica.

En esta actitud de precaución, no solo cuenta la experiencia de fracasos anteriores, sino también el reconocimiento de que la economía está lejos de emprender una fase de recuperación. Y está latente el interés político de no favorecer el clima de optimismo cuando se pretende seguir aplicando una política muy dura contra los trabajadores, expresada en el proyecto de presupuesto para 1986 y en las directrices salariales avanzadas por el gobierno.

J. Albarracín
P. Montes



1986 el IPC volverá a crecer a cifras de dos dígitos. Además, en lo que respecta a los precios de los alimentos, las repercusiones del IVA tenderán a concentrarse en los primeros meses del año, por lo que en los meses del rebrote de la inflación puede ser importante. No hay que descartar que, dado que es en estos meses en los que se realiza el grueso de la negociación colectiva, el Gobierno ponga en práctica alguna medida espectacular, como una congelación de los precios de los alimentos, por ejemplo, con el propósito de aplazar el impacto del IVA sobre los precios. Pero su eficacia será dudosa y, en todo caso, el IVA puede hacer que la espiral inflacionista vuelva a agravarse de nuevo. Desde luego, si además de todo ello durante 1985 la inflación es mayor que en el año anterior, las cosas serán más difíciles para el gobierno, pero no está dispuesto a admitirlo. Solchaga mantiene que la inflación prevista para 1986 será del 8% y que ello incluye unas repercusiones del IVA sobre los precios de 1,5%. Sabe que esto no puede ocurrir, pero lo necesita para continuar con la moderación en el crecimiento de los salarios.

Los salarios

Durante los siete primeros meses de este año se han firmado 4.220.000 trabajadores y el crecimiento salarial medio pactado ha sido del 7,4%. Además, ha sido una negociación colectiva en la que la conflictividad laboral se ha reducido enormemente: según datos oficiales, en los meses de enero a mayo hicieron huelga un 69% de trabajadores menos que en los mismos meses de 1984. Si se comparan estos datos con los del año anterior, hay que concluir que, en 1985, la negociación colectiva afectó a un número de trabajadores ligeramente inferior al de 1984, que el crecimiento salarial pactado fue similar y que, por lo tanto, dada la reducción que se ha producido en el crecimiento del IPC, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios ha sido menor.

Para 1986, dado que la inflación programada por Solchaga es del 8%, según el AES, la banda salarial debe ser del 7,2% (90% de la inflación programada) al 8,5% (107% de la inflación programa-

da). Si, como se ha señalado antes, la inflación se sitúa en el 11% al 13%, la consecuencia es que la pérdida de poder adquisitivo puede ser enorme. Pero esto no es todo. Para 1.696.000 trabajadores cuyo patrón es el Estado la agresión es mucho mayor. Solchaga quiere reducir el déficit público y una de las formas de hacerlo es reduciendo el crecimiento de los salarios de los funcionarios, de los trabajadores de las empresas públicas y de todos aquellos que dependen de él. Los salarios de estos trabajadores no se fijan en convenio colectivo sino en los presupuestos, y en los mismos se está previendo un crecimiento del orden del 5,5% al 6,5%. Cuando los presupuestos entren en vigor a primeros de año, la situación será irreparable, por lo que es ahora cuando hay que evitar que la agresión se consuma.

El empleo y el paro

En el primer semestre del presente año, el empleo se ha reducido en 47.000 personas y el paro ha aumentado en 23.000. Si se comparan estos resultados con los del mismo período de 1984, en

el que se perdieron 164.000 puestos de trabajo y el paro aumentó en 93.000, hay que concluir que al menos en el tema del empleo "el empeoramiento ha mejorado" (esta es la forma que tiene el gobierno de presentar los aumentos del paro).

Sin embargo, no quiere decir que su política de reducciones salariales para que aumente el empleo, funcione. En efecto, la pérdida de puestos de trabajo continúa siendo muy intensa en la industria, sector en particular donde su teoría debería funcionar. Durante el primer semestre del año la industria ha perdido 53.000 puestos de trabajo, más que en el mismo período del año anterior, en el que, como se ha dicho, la situación estuvo muy deteriorada (en particular, en el metal se perdieron durante estos meses más de 59.000 puestos de trabajo). Si durante el primer semestre se ha moderado la caída del empleo ha sido por los servicios, cuya ocupación creció en 50.000 personas, y por las administraciones públicas, que crearon otros 21.000 puestos de trabajo. Hay que temerse que esto se pueda invertir en cualquier momento.

Además, las pérdidas de puestos de trabajo no pueden continuar siendo tan intensas como en 1984, dado el reducido volumen de empleo al que se ha llegado: en la industria solamente hay 2.251.000 trabajadores asalariados (solamente un 6% de la población total del país) y en el conjunto de la economía los mismos no superan los 7.100.000 (el 18,7% de la población). Como contrapartida, el nivel de paro es extraordinariamente elevado: 2.982.000 personas en el segundo trimestre de 1985, lo que supone el 21,9% de la población activa.

Durante los últimos meses, el Gobierno está presentando una reducción del volumen de paro: "julio es el quinto mes consecutivo en el que se reduce el paro registrado" ha dicho. Aunque es indudable que se ha amortiguado el crecimiento del paro, hay que tener en cuenta que en esta mejora influyen factores estacionales (los trimestres de crecimiento más intensos del paro son el primero y el último y los mejores los del medio del año) y, además, el INEM ha cambiado los criterios por los que se calcula el paro registrado, por lo que no se sabe que es lo que está detrás de estas cifras. Por poco que caiga el empleo, y dado el aumento de la población activa, a final de año se habrán alcanzado los 3.000.000 de parados.

Perspectivas

Como se indicaba, el gobierno se mueve entre la necesidad de ofrecer algunos éxitos económicos y la imposibilidad e inconveniencia de mostrarse abiertamente optimista, todo lo cual crea un cierto confusionismo que conviene disipar. La austeridad seguirá dominando la política del gobierno socialista, y con ella continuará la depresión económica y las agresiones contra los trabajadores. La zanañoria de la recuperación de la inversión y de la creación de puestos de trabajo la seguirán presentando, pero será inalcanzable y, entre tanto, proseguirá la degradación de las condiciones del empleo, convirtiéndose en una mercancía cada vez más barata, renovable y desechable. □

Sacristán, algo más que un filósofo

A finales de agosto recibimos la triste noticia de la muerte de Manuel Sacristán. Varios han sido los artículos dedicados a resaltar la importancia de la contribución hecha por este filósofo, pensador y revolucionario a lo largo de su vida. Pero, salvo honrosas excepciones, pocos son los que han mostrado una valoración adecuada de cuál fue su evolución y su papel en la puesta al día del marxismo revolucionario, en una época de crisis general de la izquierda y del movimiento obrero.

J. Pastor

Aunque en toda una primera etapa sus reflexiones y su práctica se desarrollaron dentro de la esfera del PSUC y de Catalunya, su independencia de criterios y su posterior ruptura con el eurocomunismo incipiente, a comienzos de los años setenta, fueron dando un creciente interés a su pensamiento entre todos los que, por diferentes caminos, hemos ido asumiendo la preocupación por hacer realidad una alternativa revolucionaria en el Estado español.

Había suficientes razones para que ese interés estuviera justificado: su esfuerzo constante por traducir, transmitir, estudiar y renovar el marxismo sobresalía cada vez más por encima de la mediocridad general del marxismo "ibérico"; su obstinación en superar el "tacticismo" de la izquierda le llevó a criticar muy pronto las claudicaciones del pactismo y a anticipar cuáles iban a ser las nuevas características que ha ido adquiriendo la crisis mundial que estamos padeciendo; y las lecciones que iba sacando de la aplicación de un marxismo abierto a la realidad contemporánea le llevaron a interrogarse sobre cómo podría consolidarse una izquierda distinta, capaz de responder a los retos de la época en que nos encontramos.

De su labor en la actualización y enriquecimiento de la teoría marxista han quedado como testimonio los diversos escritos que ahora están siendo recopilados por Editorial Icaria: sus artículos sobre Marx, Labriola, Lenin, Gramsci, Lukacs, Russell; sus reflexiones filosóficas más generales, así como las aportaciones que han ido apareciendo en **Materiales y Mientras Tanto**, confirman que no es exagerado decir que ha sido el primer marxista de talla excepcional desde la derrota sufrida en 1939.

Este reconocimiento tiene su importancia para quienes, como nosotros, procedemos de otra corriente dentro del marxismo; porque, a pesar de las diferencias y de la distancia, hemos podido comprobar que su trabajo entroncaba con el que antes de la guerra realizaban quienes escribían en revistas como **Comunismo o Leviatán** y militaban en los

sectores críticos de la izquierda socialista y comunista. Paco Fernández-Buey hace una consideración semejante en un artículo titulado "Marxismo en España" (**Sistema**, 66, mayo 85) cuando señala: "Se ha podido decir con razón que ahí (en **Comunismo y Leviatán**, sobre todo) está el inicio del debate teórico marxista en España: un debate en el que parecen agolparse de pronto todos los problemas, viejos y nuevos: desde el intento de hallar explicaciones a la persistencia de la tradición anarquista en el movimiento obrero hasta la justificación histórica de las cuatro Internacionales existentes hasta entonces, desde la polémica acerca de la naturaleza de la revolución rusa hasta el análisis del fascismo italiano y la estimación de la estrategia obrera para hacer frente al auge del fascismo en Europa, desde el estudio del punto de vista de los clásicos de la tradición sobre las nacionalidades al examen de la relación entre nacionalismo y socialismo en Catalunya,

Euskadi y Galicia, desde la crítica del economicismo en la corriente dominante en la Segunda Internacional a la discusión acerca de la actitud que había que adoptarse ante el peligro de guerra".

Sacristán enlazó con ese marxismo vivo y vinculado a la formación de un movimiento obrero revolucionario, y por eso intentó responder a los problemas de nuestro tiempo con su pensamiento y con su acción. Habría, quizás, que destacar dos diferencias importantes respecto a sus pre-

decesores: una, también señalada por Fernández-Buey, que se refiere a su mayor atención a la cuestión del método y a los problemas epistemológicos más generales; otra, la creada por las dificultades del vacío posterior a la guerra civil y por la hegemonía del estalinismo, que le obligó a un mayor esfuerzo intelectual, pero también, como él mismo reconocía en una entrevista, a alejarse de una actividad militante directa después de la frustrada experiencia con el PSUC.

"Revisionista" y revolucionario

En todo caso, su papel en la revisión revolucionaria del marxismo ha sido muy positivo: su firme convicción de que había que integrar el análisis y la respuesta a la crisis ecológica dentro del proyecto emancipatorio, o su comprensión de lo que está significando la amenaza de guerra nuclear para la supervivencia de la humanidad, fueron, por poner sólo esos dos ejemplos, consideraciones que se adelantaron a las hechas actualmente por la mayor parte de la izquierda comunista.

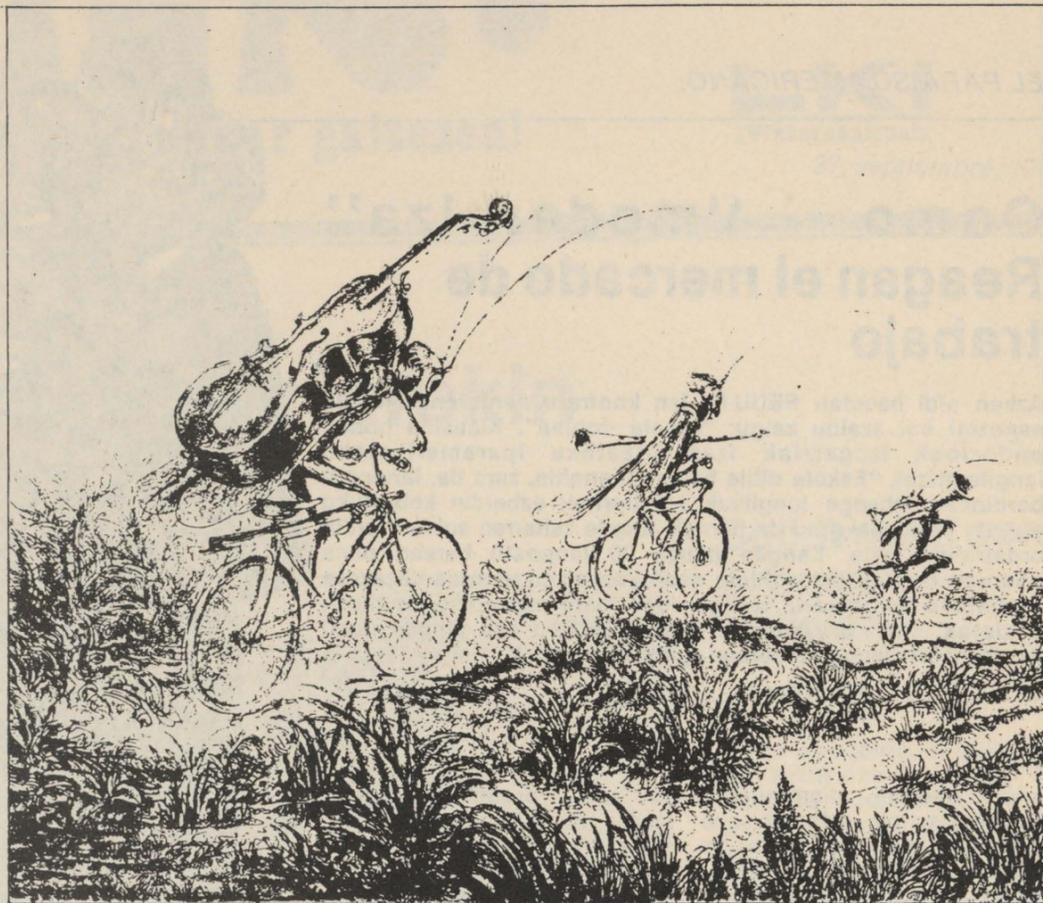
Quizás donde más controversia provocaba era en las conclusiones a las que quería llegar en el terreno de la estrategia: la relación entre la lucha por la paz y la revolución, la preocupación por reconsiderar el papel de la violencia en la era nuclear, la actitud internacionalista frente a los nacionalismos, la caducidad o no del "modelo" leninista de organización para construir una izquierda radical y alternativa, etc.

Sobre éstas y otras cuestiones esperamos poder tener ocasiones para discutir con el

conjunto de miembros de la redacción de **Mientras Tanto**. Pero hay que reconocer que la actitud de Sacristán estaba alejada siempre de cualquier "moda" y se encontraba fielmente unida a la defensa del ideal emancipatorio del comunismo. Por eso, y porque no esperaba ya nada de la socialdemocracia gobernante y del eurocomunismo en crisis, siempre pudimos observar en él un respeto al trabajo que partidos como MC y LCR hacíamos en los movimientos, especialmente en el pacifista.

Hubiéramos deseado sin duda que "el último Sacristán" nos hubiera conocido mejor para poder avanzar así en el acercamiento y el diálogo entre las diferentes corrientes revolucionarias. Deseamos que sus compañeros más afines cubran ese vacío y, por nuestra parte, habrá que poner más interés del prestado hasta ahora para que el debate fraternal continúe y mejore.

Hay algo en la trayectoria vital de Sacristán que ha sido resaltado por quienes más le conocían: era esa dimensión humana en la que la reflexión minuciosa iba acompañada de la pasión por alcanzar el objetivo. Quizás eso le llevó a lo que un viejo dirigente del PSUC calificaba en él como "alergia" frente a la política de pactos con fuerzas burguesas. Puede que, como ese mismo dirigente señalaba, ese sentimiento tuviera algo de "biológico"; pero, a la vista de su testamento intelectual y práctico, era mucho más que eso: expresaba su convicción de que el marxismo, para llegar a la meta del comunismo, sólo podía ser crítico, sin contemplaciones y sin miedo a entrar en conflicto con los poderes establecidos, tal como lo proponía el propio Marx. □



EL PARAISO AMERICANO:

Como "moderniza" Reagan el mercado de trabajo

Azkenaldi hauetan EEUU-ko lan kontratu nerrietan klausula espezial bat azaldu zaigu: "eskala doblea". Klausula honen ondorioak izugarriak izan litzateke iparameriketako langileentzat. "Eskala dible honen esanahia, zera da, lanpostu berdinean lehengo langileak eta berriek ezberdin kobratuko dutela, oraingoei (hau da berriei) langile zaharren soldata erdia ordainduko zaie. Langile hauek 20 lanpostu berean pasa ondoren hasiko dira soldata osoa kobratzen. Pentsa dezakezenbateko beherakada izango duen iparameriketako langileen soldatak, batez ere kontuan izanik EEUU-n oso langile gutxi direla 20 urte lanpostu berean egiten dituztenak.

Inprecor

La enorme disminución global de los salarios que suponen estas medidas se agravarán más aún por la movilidad de empleo de los obreros. Son muy pocos los que en EEUU alcanzan los 20 años de antigüedad. La causa principal de ello son métodos muy extendidos en la patronal americana como, por ejemplo, los de la firma "Cudahy" de la industria alimentaria, que acaba de realizar un cambio ficticio de propietario, que le ha permitido despedir a 200 obreros sindicados, admitiendo luego a otros no sindicados y con un salario inferior a la mitad de los anteriores. Otro ejemplo: en 1983, "Texas Air" hizo quebrar una de sus filiales, rompió los contratos de trabajo, volvió a contratar con el 50% del salario anterior y reconstruyó su filial. En general, en la industria del automóvil, se despide y se contrata según la evolución del mercado y esta práctica se ha extendido a otros sectores, por ejemplo, en la industria electrónica. Así, en "Silicon Valley", paraíso de la nueva industria americana, puede compararse fácilmente la situación de los obreros empleados para realizar un pedido concreto, con los obreros de los años 30, que iban pasando de una a otra cosecha siguiendo el ritmo de las estaciones. Pero las estaciones que marcan hoy la vida social americana son las del capitalismo tardío...

La nueva política industrial

Esta evolución corresponde a las exigencias patronales producto de la nueva política industrial. Por ejemplo, en el gigante multinacional del sector textil "Du Pont", esta política se divide en tres etapas. En primer lugar, reducir empleo (11.000 puestos de trabajo han sido eliminados en el primer trimestre de 1985). A continuación, especializarse en productos de alta calidad, que son más rentables porque se paga a los obreros una parte menor

del valor producido. Finalmente, dejar la producción de menor rendimiento en manos de pequeñas empresas subcontratadas. La ventaja esencial de estas pequeñas empresas consiste en que el coste social es muy inferior en ellas (salarios más bajos, inexistente protección social, sindicalización frecuentemente nula, facilidades para las quiebras...). Además, los Estados dan facilidades diversas a este tipo de empresas (impuestos, subvenciones). Y enfin, como veremos más adelante, las contratadas en el sector textil escapan a todo control legal.

Una transformación geográfica se suma a esta transformación estructural. Las empresas se desplazan hacia el extranjero, o hacia el Sur y el Oeste de los EEUU, donde los salarios son más bajos, los costes sociales inferiores y la protección legal y gubernamental más fuerte. Esta evolución comenzó después de la 2ª Guerra Mundial en el textil y la confección y se ha ido extendiendo después, como una mancha de aceite, a la industria petrolera y, ahora, a la industria electrónica y nuclear.

La estrategia patronal en los convenios colectivos

La influencia de esta evolución sobre las relaciones sociales se muestra claramente en las negociaciones del convenio colectivo que empezaron en el mes de junio en la "Westinghouse". La estrategia patronal se estableció así: **se acabaron los convenios sectoriales** (hasta ahora las negociaciones tomaban como referencia los convenios adoptados por el gran competidor, la "General Electric"), **hay que negociar fábrica por fábrica**; como dijeron los delegados patronales, **"no es posible fijar los salarios en una fábrica de motores según los beneficios realizados en la electrónica"**. De este modo, la patronal rentabiliza al máximo sus relaciones de fuerzas en



las distintas fábricas de la empresa y, a la vez, se debilitan las posiciones sindicales.

Pero la disminución de los salarios y el debilitamiento de los sindicatos no constituyen los únicos objetivos patronales. Quizás el objetivo más importante es conseguir la disminución o incluso la desaparición de la protección social. Hay que tener en cuenta que en EEUU la seguridad social es prácticamente inexistente a nivel nacional. Solamente los asalariados de las grandes empresas de las regiones con altas tasas de sindicalización han logrado imponer en los últimos decenios ciertas medidas de protección social en los contratos de trabajo (seguros de paro, jubilaciones, atención sanitaria...). La desaparición de estas medidas supondría una doble ventaja para la patronal: por una parte, disminuiría el coste salarial global; por otra parte, y sobre todo, esta situación llevaría a los trabajadores a acumular a toda prisa el mayor dinero posible para preparar su jubilación y para poder hacer frente a los riesgos del paro, la enfermedad, los accidentes (hay 6 millones de accidentes laborales anuales en EEUU). Para conseguir esto, los trabajadores deberán aceptar más horas extras y menos vacaciones y serán más prudentes en sus reivindicaciones, por miedo al paro sin ninguna clase de indemnización, ni seguro. Se agravará así una situación que existe ya en algunos sectores, por ejemplo en el automóvil: en "General Motors", gracias a las horas extras, la jornada real de trabajo es de 10 a 12 horas diarias, 6 días a la semana; en la "Ford", la media semanal es de 58 horas. La ideología del "self-made-man", interpretada ahora como el hombre que se asegura por sí mismo su porvenir está siendo propagada por todos los niveles de la

sociedad americana (TV, escuela, periódicos), de forma que se trata de presentar esa situación como algo normal, o incluso deseable.

Por supuesto, simultáneamente se disminuyen las tarifas de las horas extras. En el metal, por ejemplo, el trabajo dominical será pagado en adelante un 25% por encima del salario normal, en vez del 50% que se pagaba hasta ahora.

Capitalismo salvaje

Durante las negociaciones de los contratos de trabajo para la futura filial de la "General Motors", "Saturn Corporation", la dirección de la empresa ha planteado otras exigencias deseadas por la patronal americana. Por ejemplo, quieren que los trabajadores tengan una "categoría única", con el fin de evitar el sistema de las "work rules" (normas de trabajo) que fijaban en los contratos de trabajo, entre otras cosas, las tareas que debía efectuar cada tipo de trabajador. Con este sistema de clasificación única, la patronal podrá emplear trabajadores en las tareas que quiera y cuando quiera, sin tener que ajustarse a las normas sindicales. Y además, al suprimir las cualificaciones podrá disminuir los salarios y los empleos.

Mientras la patronal trata de imponer sus condiciones, la administración Reagan trata de facilitarle la tarea con diversos proyectos de ley.

El primero trata de establecer un salario mínimo para los menores de 19 años, inferior en un 25% al salario mínimo actual. Otros tratan de reducir las limitaciones existentes al trabajo infantil. Y a la vez, con los recortes presupuestarios en educación, la supresión de los convenios que garantizaban una enseñanza adecuada

para los niños en los ghettos negros y de origen latinoamericano y con la baja de los ingresos familiares, el gobierno da a la patronal una futura mano de obra mal pagada y fácilmente explotable. Enfin, Reagan quiere crear "zonas de empresas", con importantes ventajas fiscales y no sujetas al salario mínimo, que se instalarán en regiones con altas tasas de paro, en las que los trabajadores están dispuestos a aceptar salarios ínfimos.

Esta "flexibilidad" patronal y gubernamental legal se complementa con otra ilegal: las "sweatshops". Estos talleres clandestinos, instalados en garajes o viejas instalaciones, símbolos de la industrialización del siglo XIX, han reaparecido estos últimos años. En ellos, los salarios a destajo son **tres veces inferiores** al salario mínimo legal, la protección es nula, los sindicatos están ausentes, las condiciones de trabajo son muy penosas y el trabajo de los niños muy frecuente. Estos talleres son esencialmente sub-contratistas de la industria electrónica y textil, que emplea mayoritariamente trabajadores emigrados clandestinos. Están sobre todo en el Sudoeste (por ejemplo, "Silicon Valley") o en los ghettos urbanos (en 1980 había 200.000 trabajadores clandestinos en Nueva York).

Así, la sumisión a las "leyes del mercado" es total. Cualquier elemento de los contratos de trabajo que responda a otro criterio —por ejemplo, el bienestar de los trabajadores— debe ser suprimido.

En los tiempos de las ilusiones en la "prosperidad general", los capitalistas negaban la tesis de que el desarrollo del capitalismo conduce al empobrecimiento de los trabajadores. Hoy es éste, el primer principio que guía toda su actividad. □